



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA

SENTENCIA TC/0547/17.

Referencia: Expedientes números TC-04-2017-0057 y TC-07-2017-0014, relativos al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional y a la demanda en suspensión de ejecución, ambos incoados por el señor Serguei Guerassimenko y Elena Pirogova contra la Sentencia núm. 1223, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, el doce (12) de octubre de dos mil dieciséis (2016).

En el municipio Santo Domingo Oeste, provincia Santo Domingo, República Dominicana, a los veinticinco (25) días del mes de octubre del año dos mil diecisiete (2017).

El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados Milton Ray Guevara, presidente; Leyda Margarita Piña Medrano, primera sustituta; Lino Vásquez Sámuel, segundo sustituto; Ana Isabel Bonilla Hernández, Justo Pedro Castellanos Khoury, Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Jottin Cury David, Rafael Díaz Filpo, Wilson Gómez Ramírez e Idelfonso Reyes, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 185.4 y 277 de la Constitución, 9 y 53 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y los

Expedientes números TC-04-2017-0057 y TC-07-2017-0014, relativos al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional y a la demanda en suspensión de ejecución, ambos incoados por el señor Serguei Guerassimenko y Elena Pirogova contra la Sentencia núm. 1223, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, el doce (12) de octubre de dos mil dieciséis (2016).



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Procedimientos Constitucionales, del trece (13) de junio del año dos mil once (2011), dicta la siguiente sentencia:

I. ANTECEDENTES

1. Descripción de la sentencia recurrida en revisión

La Sentencia núm. 1223, objeto del presente recurso de revisión de decisión jurisdiccional, fue dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia el doce (12) de octubre del año dos mil dieciséis (2016) y, en su dispositivo dispuso:

Primero: Declara inadmisibile el recurso de casación intentado por Serguei Guerassimenko y Elena Pirogova contra la sentencia núm. 00204-2012, dictada el 21 de marzo del 2012 por la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Plata, cuyo dispositivo se reproduce en otro lugar de este fallo; Segundo: Condena a Serguei Guerassimenko y Elena Pirogova, al pago de las costas del procedimiento y ordena su distracción a favor Basilio Guzmán R. y Yohanna Rodríguez C., abogados de la parte recurrida, quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad. (sic)

La indicada sentencia fue notificada a los recurrentes, Serguei Guerassimenko y Elena Pirogova, mediante el Acto núm. 1455/2016, instrumentado por el ministerial Adalberto Ventura Ventura, alguacil ordinario del Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de Puerto Plata, el catorce (14) de diciembre del año dos mil dieciséis (2016).

Expedientes números TC-04-2017-0057 y TC-07-2017-0014, relativos al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional y a la demanda en suspensión de ejecución, ambos incoados por el señor Serguei Guerassimenko y Elena Pirogova contra la Sentencia núm. 1223, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, el doce (12) de octubre de dos mil dieciséis (2016).



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

2. Presentación del recurso de revisión jurisdiccional

Los recurrentes, Serguei Guerassimenko y Elena Pirogova, interpusieron el presente recurso de revisión jurisdiccional mediante instancia depositada por ante la secretaría de la Suprema Corte de Justicia el veintinueve (29) de diciembre del año dos mil dieciséis (2016), y recibido en la secretaria del Tribunal Constitucional, el seis (6) de febrero de dos mil diecisiete (2017).

El recurso de revisión y la solicitud de suspensión les fue notificado a los recurridos, Pedro Domínguez Brito, Robert Martínez Vargas, José Manuel Mora Apolinario y a la Constructora Force One S.R.L, ambos mediante el Acto núm. 1602/2016, instrumentado por el ministerial Manuel de Jesús Gómez, alguacil ordinario de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago, el treinta (30) de diciembre de dos mil dieciséis (2016).

3. Fundamentos de la sentencia recurrida en revisión

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia declaró inadmisibile el recurso de casación interpuesto por los señores Serguei Guerassimenko y Elena Pirogova, fundamentando, entre otros, en los siguientes motivos:

a. Que el examen de la sentencia impugnada revela que la misma es el resultado de un procedimiento de embargo inmobiliario abreviado, ejecutado en virtud de la ley núm. 6186, sobre Fomento Agrícola, seguido por Pedro Domingo Brito, Robert Martínez Vargas y Jose Manuel Mora Apolinario en perjuicio de Serguei Guerassimenko y Elena Pirogova mediante el cual el inmueble embargado fue adjudicado a la Constructora Force One S. R. L., que el proceso mediante el cual se produjo la adjudicación se desarrolló sin incidentes, de lo que resulta

Expedientes números TC-04-2017-0057 y TC-07-2017-0014, relativos al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional y a la demanda en suspensión de ejecución, ambos incoados por el señor Serguei Guerassimenko y Elena Pirogova contra la Sentencia núm. 1223, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, el doce (12) de octubre de dos mil dieciséis (2016).



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

que la decisión adoptada al efecto tiene un carácter puramente administrativo pues se limita a dar constancia del transporte, a favor de la adjudicataria, del derecho de propiedad del inmueble subastado, y por tanto, no es susceptible de los recursos instituidos por la ley, incluyendo el recurso de casación, sino de una acción principal en nulidad; que, en consecuencia, no se trata de una de las decisiones a que se refiere el artículo 1 de la ley sobre procedimiento de casación núm. 3726, dictada el 29 de diciembre de 1953, motivo por el cual el recurso que nos ocupa es inadmisibile.

4. Hechos y argumentos jurídicos de los recurrentes en revisión y demandantes en suspensión de ejecución de sentencia

A. Los recurrentes, Serguei Guerassimenko y Elena Pirogova, solicitan que sea anulada la sentencia recurrida, y, para justificar sus pretensiones, argumentan, entre otros, los siguientes motivos:

a. Que contrario a lo esgrimido por los jueces de la Suprema Corte de Justicia, si hubo un incidente en sobreseimiento que el juez del tribunal a quo, que el juez de una forma dudosa, arbitraria e ilegal, inconstitucional, subasto el inmueble sin dar cumplimiento a lo establecido en la ley, contrario al debido proceso y a una real tutela judicial efectiva, no observo, las violaciones constitucionales enunciadas por los recurrentes, la misma son de orden público y frente a las irregularidades contenidas por el juez a quo, debió la suprema Casar la decisión por haberse violado el debido proceso y demás norma de carácter constitucional, como lo es el principio de legalidad en la que incurrió el juez del primer grado, derechos que no fueron tutelado por dicho órgano.



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

b. A que la honorable Cámara Civil de la Suprema Corte de Justicia, al dictar la sentencia cuya revisión se solicita, violento en detrimento de esta parte exponente derechos fundamentales consagrados y tutelado por la constitución dominicana, concerniente a la tutela judicial efectiva y el debido proceso de ley, el derecho de densa y el acceso a la justicia y el principio de legalidad y razonabilidad. (sic)

c. A que por lo que al estar dicha sentencia fundamentada en franca violación a derechos fundamentales, es evidente que, mediante la presente acción en revisión, dicha sentencia debe ser anulada, al conocer el presente recurso en revisión, enviando dicho proceso nuevamente a la Cámara Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, para que esta actué con estricto apego a las decisiones establecidas por el tribunal constitucional, en relación al derecho fundamental violado.

B. Los demandantes en suspensión, señores Serguei Guerassimenko y Elena Pirogova, pretenden la suspensión de la referida sentencia y alegan, para justificar dichas pretensiones, los motivos siguientes:

a. Que el Tribunal Constitucional ha establecido que la suspensión en una medida de naturaleza excepcional, en razón de que su otorgamiento afecta la tutela judicial efectiva de la parte de contra la cual se dicta, privándola de la efectividad inmediata de la sentencia dictada en su favor. (TC/0046/13; así pues, es necesario determinar con un examen preliminar, si el solicitante plantea argumentos que cuestionen válidamente los fundamentos de la sentencia recurrida y si sus pretensiones justifican que el tribunal adopte una medida cautelar que afectará de manera provisional la seguridad jurídica que conlleva una decisión jurisdiccional definitiva.



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

b. Que, en el caso de la especie, se puede claramente observar que se está ante una flagrante violación a los derechos fundamentales de los recurrentes, tal es el caso de que el título en virtud del cual fue realizado el embargo inmobiliario abreviado fue anulado por el juez que lo otorgo, así como también en el desarrollo del proceso se verifica los atropellos y vejámenes a lo que fueron objetos los requirentes en franca violación a sus derechos fundamentales constitucionales.

5. Hechos y argumentos jurídicos de los recurridos en revisión y demandados en suspensión de ejecución de sentencia

Los recurridos, Pedro Domínguez Brito, Robert Martínez Vargas, Jose Manuel Mora Apolinario y la Constructora Force One S.R.L., no realizaron escrito de defensa, no obstante habérseles notificado el recurso de revisión jurisdiccional, así como la solicitud de demanda de suspensión de ejecución de sentencia, ambos notificados mediante el Acto núm. 1602/2016, instrumentado por el ministerial Manuel de Jesús Gómez, alguacil ordinario de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago, el treinta (30) de diciembre de dos mil dieciséis (2016).

6. Pruebas documentales

Los documentos relevantes depositados en el trámite del recurso de revisión constitucional que nos ocupa, y de la demanda en suspensión, son los siguientes:

1. Sentencia núm. 1223, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, del doce (12) de octubre de dos mil dieciséis (2016).
2. Acto núm. 1455/2016, instrumentado por el ministerial Adalberto Ventura Ventura, alguacil ordinario del Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial

Expedientes números TC-04-2017-0057 y TC-07-2017-0014, relativos al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional y a la demanda en suspensión de ejecución, ambos incoados por el señor Serguei Guerassimenko y Elena Pirogova contra la Sentencia núm. 1223, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, el doce (12) de octubre de dos mil dieciséis (2016).



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

de Puerto Plata, el catorce (14) de diciembre de dos mil dieciséis (2016), relativo a la notificación de la sentencia.

3. El recurso de revisión jurisdiccional contra la Sentencia núm. 1223, interpuesto por Serguei Guerassimenko y Elena Pirogova, depositado ante la secretaría de la Suprema Corte de Justicia, el veintinueve (29) de diciembre de dos mil dieciséis (2016), y recibido en la secretaría del Tribunal Constitucional, el seis (6) de febrero de dos mil diecisiete (2017).

4. Acto núm. 1602/2016, instrumentado por el ministerial Manuel de Jesús Gómez, alguacil ordinario de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago, el treinta (30) de diciembre de dos mil dieciséis (2016), sobre la notificación del recurso de revisión y de la demanda en suspensión.

5. Sentencia núm. 00204-2012, dictada por la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Plata, del veintiuno (21) de marzo de dos mil doce (2012).

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

7. Síntesis del conflicto

El presente caso tiene su origen en un embargo inmobiliario perseguido por Pedro Domínguez Brito, Robert Martínez Vargas, Jose Manuel Mora Apolinario y Constructora Force One S.R.L., en perjuicio de los señores Serguei Guerassimenko y Elena Pirogova, por ante la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Plata, resultando la Sentencia núm. 0024-2012, la cual ratifica la adjudicación

Expedientes números TC-04-2017-0057 y TC-07-2017-0014, relativos al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional y a la demanda en suspensión de ejecución, ambos incoados por el señor Serguei Guerassimenko y Elena Pirogova contra la Sentencia núm. 1223, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, el doce (12) de octubre de dos mil dieciséis (2016).



República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

del bien embargado a la Constructora Force One S.R.L., por lo que esta decisión fue recurrida en casación, resultando la Sentencia núm. 1223, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, que declaró inadmisibile el recurso de casación. Esta decisión es objeto del presente recurso de revisión jurisdiccional, y de la demanda en suspensión, ante este Tribunal Constitucional.

8. Competencia

Este Tribunal es competente para conocer del presente recurso, en virtud de lo que disponen los artículos 185.4 y 277 de la Constitución, 9, 53, 54 y 58.4 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, del trece (13) de junio del año dos mil once (2011).

9. Inadmisibilidad del presente recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional

El Tribunal Constitucional estima que el presente recurso de revisión es inadmisibile, por las siguientes razones:

a. Conforme a las disposiciones establecidas en los artículos 277 de la Constitución y 53 de la referida Ley núm. 137-11, son susceptibles del recurso de revisión constitucional, las sentencias que hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, luego de proclamada la Constitución, el veintiséis (26) de enero de dos mil diez (2010).

b. En el presente caso, se cumple el indicado requisito, en razón de que la decisión recurrida fue dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, el doce (12) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), y es una

Expedientes números TC-04-2017-0057 y TC-07-2017-0014, relativos al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional y a la demanda en suspensión de ejecución, ambos incoados por el señor Serguei Guerassimenko y Elena Pirogova contra la Sentencia núm. 1223, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, el doce (12) de octubre de dos mil dieciséis (2016).



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

decisión que adquirió la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, al ser emitida con posterioridad al veintiséis (26) de enero del año dos mil diez (2010).

c. El artículo 53 de la referida Ley núm. 137-11, establece que el recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional procede, en los siguientes casos: *1) cuando la decisión declare inaplicable por inconstitucional una ley, decreto, reglamento, resolución u ordenanza; 2) cuando la decisión viole un precedente del Tribunal Constitucional; y 3) cuando se haya producido una violación de un derecho fundamental.*

d. En el presente caso, no aplica la primera causal, ya que el recurrente no está invocando la inaplicabilidad, por inconstitucionalidad, de una ley, decreto, reglamento, resolución u ordenanza.

e. En la especie, los recurrentes invocan que la Suprema Corte de Justicia incurrió en violación a la tutela judicial efectiva y el debido proceso, al declarar la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia inadmisibles sus recursos de casación. De manera tal, que en el presente caso, se invoca la tercera causal que prevé el referido artículo 53.3 de la referida Ley núm. 137-11, es decir, la violación a garantías fundamentales.

f. Cuando el recurso de revisión constitucional está fundamentado en la causal indicada en el párrafo anterior, deben cumplirse las condiciones previstas en el mencionado artículo 53.3 de la referida Ley núm. 137-11, que son las siguientes:

a. Que el derecho fundamental vulnerado se haya invocado formalmente en el proceso, tan pronto quien invoque la violación haya tomado conocimiento de la misma.



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

b. Que se hayan agotado todos los recursos disponibles dentro de la vía jurisdiccional correspondiente y que la violación no haya sido subsanada.

c. Que la violación al derecho fundamental sea imputable de modo inmediato y directo a una acción u omisión del órgano jurisdiccional, con independencia de los hechos que dieron lugar al proceso en que dicha violación se produjo, los cuales el Tribunal Constitucional no podrá revisar.

g. Al analizar el cumplimiento del requisito a, se comprueba que el reclamo fundamental que hace la recurrente no ha sido “invocado formalmente en el proceso”; y no pudo serlo, porque la lesión cuya reparación se reclama la ha producido una decisión judicial de primera instancia que la recurrente no ha tenido, en términos procesales, oportunidad para presentar el referido reclamo, situación ante la cual dicho requisito deviene en inexigible. (Sentencia TC/0057/12, numeral 8, literal b, página 7)

h. Lo mismo ocurre con el requisito del literal b) del artículo 53.3, pues si se acepta que su invocación ha sido imposible, a fortiori ha de aceptarse que no ha habido recursos previos que agotar para subsanar una violación que ni siquiera ha sido invocada previamente, situación en la que también aplica la inexigibilidad referida en el párrafo anterior. (Sentencia TC/0057/12, numeral 8, literal c, página 7)

i. El tercero de los requisitos no se cumple en la especie, toda vez que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia declaró inadmisibile el recurso de casación, en virtud de que la sentencia recurrida no tenía abierta la vía de los recursos instituidos por la ley, sino de una acción principal en nulidad, por lo que, al interponerse el recurso de casación por ante la Suprema Corte de Justicia, el mismo deviene inadmisibile, por no tratarse de una sentencia a la que se refiere

Expedientes números TC-04-2017-0057 y TC-07-2017-0014, relativos al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional y a la demanda en suspensión de ejecución, ambos incoados por el señor Serguei Guerassimenko y Elena Pirogova contra la Sentencia núm. 1223, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, el doce (12) de octubre de dos mil dieciséis (2016).



República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

el artículo 1, de la Ley núm. 3726, sobre Procedimiento de Casación, dictada el veintinueve (29) de diciembre de mil novecientos cincuenta y tres (1953); es por ello que la falta fue cometida por el mismo recurrente, al no cumplir con el mandato de la ley, y no por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia.

j. En este contexto podemos concluir, que a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, al sustentar su fallo en la aplicación de dicho artículo 1, de la ley anteriormente citada, no se le puede imputar vulneración de derechos fundamentales, ya que, como bien estableció dicha sala en la parte in-fine de su decisión, considerando 4, de la paginas 5 y 6, al disponer:

que el proceso mediante el cual se produjo la adjudicación se desarrolló sin incidentes, de lo que resulta que la decisión adoptada al efecto tiene un carácter puramente administrativo pues se limita a dar constancia del transporte, a favor de la adjudicataria, del derecho de propiedad del inmueble subastado, y por tanto, no es susceptible de los recursos instituidos por la ley, incluyendo el recurso de casación, sino de una acción principal en nulidad; que, en consecuencia, no se trata de una de las decisiones a que se refiere el artículo 1 de la ley sobre procedimiento de casación núm. 3726, dictada el 29 de diciembre de 1953, motivo por el cual el recurso que nos ocupa es inadmisibile.

k. El artículo 1 de la Ley núm. 3726, establece que: “La Suprema Corte de Justicia decide como Corte de Casación si la Ley ha sido bien o mal aplicada en los fallos en última o única instancia pronunciados por los tribunales del orden judicial. Admite o desestima los medios en que se basa el recurso, pero sin conocer en ningún caso del fondo del asunto”. Como se puede apreciar del contenido de este artículo, el mismo no permite que sean recurridas en casación las decisiones jurisdiccionales sobre la adjudicación de un inmueble que se realizó sin contestaciones incidentales; en ese sentido, y por la naturaleza

Expedientes números TC-04-2017-0057 y TC-07-2017-0014, relativos al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional y a la demanda en suspensión de ejecución, ambos incoados por el señor Serguei Guerassimenko y Elena Pirogova contra la Sentencia núm. 1223, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, el doce (12) de octubre de dos mil dieciséis (2016).



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

administrativa de la decisión, está justificada la inadmisibilidad del recurso de casación.

l. En ese sentido, el Tribunal Constitucional, ha fijado su criterio, en el precedente de la Sentencia TC/0057/12, del dos (2) de noviembre de dos mil (2012), disponiendo que:

La aplicación, en la especie, de la norma precedentemente descrita ha sido apegada a lo dispuesto por el legislador y, en consecuencia, no es imputable a la Suprema Corte de Justicia la comisión de una acción o una omisión cuya consecuencia haya sido la violación de un derecho fundamental.

m. Dicho criterio ha sido reiterado por el Tribunal Constitucional, entre otras, en las Sentencias TC/0039/15, del nueve (9) de marzo de dos mil quince (2015); TC/0071/16, del diecisiete (17) de marzo de dos mil dieciséis (2016) y TC/481/16, del dieciocho (18) de octubre de dos mil dieciséis (2016).

n. Por lo anterior, las conculcaciones a derechos fundamentales invocadas por los recurrentes en revisión, no les son imputables a la referida alta corte, razón por lo que procede declarar inadmisibles los recursos de revisión que nos ocupa, en vista de que no se satisface el indicado requisito de admisibilidad previsto en el artículo 53.3.c de la referida Ley núm. 137-11.

10. Sobre la solicitud de suspensión de ejecución de sentencia

a. En el presente caso, el Tribunal Constitucional considera que la demanda en suspensión de ejecución carece de objeto y de interés jurídicos, en razón de la decisión que tomará sobre el recurso de revisión constitucional, por lo que resulta innecesaria su ponderación y colocación en el dispositivo, criterio este

Expedientes números TC-04-2017-0057 y TC-07-2017-0014, relativos al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional y a la demanda en suspensión de ejecución, ambos incoados por el señor Serguei Guerassimenko y Elena Pirogova contra la Sentencia núm. 1223, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, el doce (12) de octubre de dos mil dieciséis (2016).



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

que ya fue establecido en la Sentencia TC/0011/13, del once (11) de febrero de dos mil trece (2013), y reiterado entre otras, en las Sentencias TC/0051/13, del nueve (9) de abril de dos mil trece (2013), TC/0034/13, del quince (15) de marzo de dos mil trece (2013), y TC/0030/14, del diez (10) de febrero de dos mil catorce (2014).

Esta decisión, firmada por los jueces del Tribunal, fue adoptada por la mayoría requerida. No figuran las firmas de los magistrados Hermógenes Acosta de los Santos, Víctor Gómez Bergés y Katia Miguelina Jiménez Martínez, en razón de que no participaron en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la Ley. Figuran incorporados el voto disidente del magistrado Lino Vásquez Samuel, segundo sustituto; y el voto salvado del magistrado Justo Pedro Castellanos Khoury. Consta en acta el voto salvado del magistrado Víctor Joaquín Castellanos Pizano, el cual se incorporará a la presente decisión de conformidad con el artículo 16 del Reglamento Jurisdiccional del Tribunal Constitucional.

Por las razones y motivos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, el Tribunal Constitucional

DECIDE:

PRIMERO: DECLARAR inadmisibles el presente recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por Serguei Guerassimenko y Elena Pirogova contra la Sentencia núm. 1223 dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, el doce (12) de octubre de dos mil dieciséis (2016).

SEGUNDO: DECLARAR el presente proceso libre de costas, de conformidad con lo establecido en el artículo 7.6 de la referida Ley núm. 137-11.

Expedientes números TC-04-2017-0057 y TC-07-2017-0014, relativos al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional y a la demanda en suspensión de ejecución, ambos incoados por el señor Serguei Guerassimenko y Elena Pirogova contra la Sentencia núm. 1223, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, el doce (12) de octubre de dos mil dieciséis (2016).



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

TERCERO: COMUNICAR esta sentencia, por secretaría, para su conocimiento y fines de lugar, a las partes recurrentes, Serguei Guerassimenko y Elena Pirogova; a la parte recurrida, Pedro Domínguez Brito, Robert Martínez Vargas, Jose Manuel Mora Apolinario y a la Constructora Force One S.R.L.

CUARTO: DISPONER que la presente sentencia sea publicada en el Boletín del Tribunal Constitucional.

Firmada: Milton Ray Guevara, Juez Presidente; Leyda Margarita Piña Medrano, Jueza Primera Sustituta; Lino Vásquez Samuel, Juez Segundo Sustituto; Ana Isabel Bonilla Hernández, Jueza; Justo Pedro Castellanos Khoury, Juez; Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Juez; Jottin Cury David, Juez; Rafael Díaz Filpo, Juez; Wilson S. Gómez Ramírez, Juez; Idelfonso Reyes, Juez; Julio José Rojas Báez, Secretario.

VOTO DISIDENTE DEL MAGISTRADO LINO VÁSQUEZ SÁMUEL

En ejercicio de mis facultades constitucionales y legales, y específicamente las previstas en el artículo 30 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, del trece (13) de junio del año dos mil once (2011); y respetando la opinión de los honorables jueces que en su mayoría de votos concurrentes aprobaron la sentencia de que se trata, formulo el presente voto disidente con relación al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional y demanda en suspensión, incoados por Serguei Guerassimenko y Elena Pirogova contra la Sentencia núm. 1223 dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia el doce (12) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), pues mi divergencia se sustenta en la posición que defendí en las deliberaciones del pleno, en el entendido de que este Colegiado debió admitir el recurso y examinar los aspectos de fondo formulados

Expedientes números TC-04-2017-0057 y TC-07-2017-0014, relativos al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional y a la demanda en suspensión de ejecución, ambos incoados por el señor Serguei Guerassimenko y Elena Pirogova contra la Sentencia núm. 1223, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, el doce (12) de octubre de dos mil dieciséis (2016).



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

por los recurrentes para determinar si se produjo la vulneración de los derechos fundamentales invocados; razón que me conduce a emitir este voto particular.

VOTO DISIDENTE:

I. PLANTEAMIENTO DE LA CUESTIÓN

1. Los señores Serguei Guerassimenko y Elena Pirogova interpusieron un recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional y demanda en suspensión el veintinueve (29) de diciembre de dos mil dieciséis (2016) en contra de la Sentencia núm. 1223, dictada por la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia el doce (12) de octubre de dos mil dieciséis (2016), cuyo dispositivo declaró inadmisibile el recurso de casación sobre la base de que la sentencia recurrida no estaba sujeta a casación, de acuerdo al artículo 1 de la Ley núm. 3726¹ sobre Procedimiento de Casación.

2. Los honorables jueces de este Tribunal concurrieron con el voto mayoritario en declarar inadmisibile el recurso de revisión por no concurrir los requisitos dispuestos en el artículo 53.3 literal c) de la Ley núm. 137-11, bajo el supuesto de que no resulta imputable a la Suprema Corte de Justicia la vulneración de derechos fundamentales como consecuencia de la aplicación de normas legales; sin embargo, como explicaremos en lo adelante, dicha afirmación solo es válida en principio.

**II. ALCANCE DEL VOTO: EN LA CUESTIÓN PLANTEADA
PROCEDÍA RESOLVER LOS ASPECTOS DE FONDO DEL RECURSO
Y DETERMINAR SI SE PRODUJO LA VULNERACIÓN A LOS
DERECHOS FUNDAMENTALES**

¹ Promulgada el 29 de diciembre de 1953.

Expedientes números TC-04-2017-0057 y TC-07-2017-0014, relativos al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional y a la demanda en suspensión de ejecución, ambos incoados por el señor Serguei Guerassimenko y Elena Pirogova contra la Sentencia núm. 1223, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, el doce (12) de octubre de dos mil dieciséis (2016).



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

3. Para fundamentar el fallo de la decisión que nos ocupa, este órgano constitucional consideró lo siguiente:

El tercero de los requisitos no se cumple en la especie, toda vez que, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia declaró inadmisibile el recurso de casación, en virtud de que, la sentencia recurrida no tenía abierta la vía de los recursos instituidos por la ley, sino de una acción principal en nulidad, por lo que, al interponerse el recurso de casación por ante la Suprema Corte de Justicia, el mismo deviene en inadmisibile, por no tratarse de una sentencia a la que se refiere el artículo 1ro., de las Ley núm. 3726 sobre Procedimiento de Casación dictada el 29 de diciembre del 1953, es por ello que, la falta fue cometida por el mismo recurrente, al no cumplir con el mandado de la ley, y, no por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia.

En este contexto podemos concluir, que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, al sustentar su fallo en la aplicación de dicho artículo 1ro., de la ley anteriormente citada, no se le puede imputar vulneración de derechos fundamentales, ya que, como bien estableció dicha sala en la parte in-fine de su decisión, considerando 4, de la paginas (sic) 5 y 6, al disponer: “que el proceso mediante el cual se produjo la adjudicación se desarrolló sin incidentes”, de lo que resulta que la decisión adoptada al efecto tiene un carácter puramente administrativo pues se limita a dar constancia del transporte, a favor de la adjudicataria, del derecho de propiedad del inmueble subastado, y por tanto, no es susceptible de los recursos instituidos por la ley, incluyendo el recurso de casación, sino de una acción principal en nulidad; que, en consecuencia, no se trata de

² El subrayado es nuestro.

Expedientes números TC-04-2017-0057 y TC-07-2017-0014, relativos al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional y a la demanda en suspensión de ejecución, ambos incoados por el señor Serguei Guerassimenko y Elena Pirogova contra la Sentencia núm. 1223, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, el doce (12) de octubre de dos mil dieciséis (2016).



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

una de las decisiones a que se refiere el artículo 1 de la ley sobre procedimiento de casación núm. 3726, dictada el 29 de diciembre de 1953, motivo por el cual el recurso que nos ocupa es inadmisibles”.

El artículo 1 de la Ley núm. 3726, establece que: “La Suprema Corte de Justicia decide como Corte de Casación si la Ley ha sido bien o mal aplicada en los fallos en última o única instancia pronunciados por los tribunales del orden judicial. Admite o desestima los medios en que se basa el recurso, pero sin conocer en ningún caso del fondo del asunto”. Como se puede apreciar del contenido de este artículo, el mismo no permite que sean recurridas en casación las decisiones jurisdiccionales sobre la adjudicación de un inmueble que se realizó sin contestaciones incidentales, en ese sentido, y por la naturaleza administrativa de la decisión, está justificada la inadmisibilidad del recurso de casación.

En ese sentido, el Tribunal Constitucional, ha fijado su criterio, en el precedente de la Sentencia TC/0057/12, del dos (2) de noviembre del año dos mil 2012, disponiendo que: La aplicación, en la especie, de la norma precedentemente descrita ha sido apegada a lo dispuesto por el legislador y, en consecuencia, no es imputable a la Suprema Corte de Justicia la comisión de una acción o una omisión cuya consecuencia haya sido la violación de un derecho fundamental.

4. Previo a los cuestionamientos que constituyen el motivo principal de este voto, conviene precisar que esta Corporación argumenta que del contenido del artículo 1 de la indicada ley 3726 se desprende que *el mismo no permite que sean recurridas en casación las decisiones jurisdiccionales sobre la adjudicación de un inmueble que se realizó sin contestaciones incidentales [...]*; sin embargo, a mi juicio esa deducción no proviene de la Ley sobre

Expedientes números TC-04-2017-0057 y TC-07-2017-0014, relativos al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional y a la demanda en suspensión de ejecución, ambos incoados por el señor Serguei Guerassimenko y Elena Pirogova contra la Sentencia núm. 1223, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, el doce (12) de octubre de dos mil dieciséis (2016).



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Procedimiento de Casación sino del artículo 148 de la Ley núm. 6186 sobre Fomento Agrícola que sostiene lo siguiente:

En caso de falta de pago y siempre que por toda y siempre que por otra causa indicada en esta Ley, el capital de un préstamo sea exigible, la venta de los inmuebles hipotecados podrá ser perseguida. Si hay contestación, ésta será de la competencia del Tribunal llamado a conocer de la venta de los inmuebles, sin que se detenga el procedimiento de adjudicación. Se procederá como en materia sumaria y la sentencia que intervenga no será susceptible de apelación³.

5. Es decir, que es el artículo 148 de la citada ley 6186 el que dispone que, en caso de producirse alguna contestación, el tribunal que conoce de la venta en pública subasta es el competente para dar solución al conflicto y su decisión no es susceptible de apelación, de modo que, al tratarse de una sentencia de única instancia, procedería pues impugnarse ante la Suprema Corte de Justicia. Dicho lo anterior es importante señalar que la Suprema Corte de Justicia sostiene que [...] el proceso mediante el cual se produjo la adjudicación se desarrolló sin incidentes, de lo que resulta que la decisión adoptada al efecto tiene un carácter puramente administrativo⁴ [...]; razonamiento que hace suyo este Colegiado sin que advirtiera que la audiencia del doce (12) de enero de dos mil doce (2012) fue aplazada por el juez de la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Tribunal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Plata para decidir una demanda incidental, según se desprende de la lectura de la sentencia recurrida en casación núm. 00204-2012 del veintiuno (21) de marzo de dos mil doce (2012), a saber:

³ Negritas incorporadas.

⁴ El subrayado es nuestro.

Expedientes números TC-04-2017-0057 y TC-07-2017-0014, relativos al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional y a la demanda en suspensión de ejecución, ambos incoados por el señor Serguei Guerassimenko y Elena Pirogova contra la Sentencia núm. 1223, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, el doce (12) de octubre de dos mil dieciséis (2016).



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Que la audiencia de fecha 12 del mes de enero del año 2012, fue aplazada a los fines de decidir la demanda incidental conocida minutos antes de la audiencia de pregones, fijándose el conocimiento del presente proceso para el día 13 de enero del año 2012, a las 11:00 am., sin necesidad de que la parte persiguiere realizara nueva publicación.

6. Como se muestra, contrario a los argumentos expuestos por la Suprema Corte de Justicia, la demanda incidental sí se produjo y por tanto la sentencia recurrida en casación no era una decisión puramente administrativa que condujera a la Corte de Casación a inadmitir el recurso; elemento que este Tribunal hubiese podido examinar en el fondo si no se hubiese decantado por emplear la fórmula genérica instituida en la indicada sentencia TC/0057/12, a partir del cual se declara inadmisibles el recurso de revisión constitucional cuando el órgano jurisdiccional estima improcedente acoger el recurso de casación en aplicación de una norma legal.

7. De acuerdo al artículo 53.3 de la Ley núm. 137-11, la revisión de las decisiones judiciales se realiza cuando se haya producido la violación de un derecho fundamental, en cuyo caso deben concurrir los requisitos siguientes:

a) Que el derecho fundamental vulnerado se haya invocado formalmente en el proceso, tan pronto quien invoque la violación haya tomado conocimiento de la misma; b) Que se hayan agotado todos los recursos disponibles dentro de la vía jurisdiccional correspondiente y que la violación no haya sido subsanada; c) Que la violación al derecho fundamental sea imputable de modo inmediato y directo a una acción u omisión del órgano jurisdiccional, con independencia de los hechos que dieron lugar al proceso en que dicha violación se produjo, los cuales el Tribunal Constitucional no podrá revisar.



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

8. La ley establece claramente los casos en que procede el examen del recurso de revisión; sin embargo, este Colegiado parte de una premisa no contemplada originalmente en los supuestos previstos en dicho artículo 53.3, es decir, que apela a una novedosa causal de inadmisibilidad: “cuando se produzca la aplicación de una norma vigente en el ordenamiento jurídico”⁵.

9. Cabe precisar, que contrario a los argumentos expuestos por esta Corporación, para determinar si la Suprema Corte de Justicia había realizado alguna acción u omisión que conculcara los derechos fundamentales de Serguei Guerassimenko y Elena Pirogova era necesario examinar los argumentos presentados por los recurrentes y contrastarlos con la sentencia impugnada, y no decantarse por enunciar que *la aplicación, en la especie, de la norma precedentemente descrita ha sido apegada a lo dispuesto por el legislador y, en consecuencia, no es imputable a la Suprema Corte de Justicia la comisión de una acción o una omisión cuya consecuencia haya sido la violación de un derecho fundamental*, toda vez que las decisiones emanadas de los órganos jurisdiccionales están basadas -directa o indirectamente- en una o varias normas de las que integran el ordenamiento jurídico.

10. Así pues, la Suprema Corte de Justicia inadmite los recursos sobre la base de normas contenidas en la Ley núm. 3726 y en las modificaciones previstas en la Ley núm. 491-08, sin que ello signifique que en todos los casos sus decisiones están exentas de yerros, pues podría ocurrir que considere erróneamente que el recurrente no era parte del proceso y no proceda a examinar el fondo del recurso, haciendo uso del artículo 4 de la Ley núm. 3726, o que declare la caducidad al estimar que el recurrente no cumplió con el plazo de los treinta (30) días dispuesto en el artículo 7 de esa misma ley, vulnerando en ambos casos el derecho a recurrir o el derecho de defensa de la parte; aspectos que solo se

⁵ El subrayado es nuestro.

Expedientes números TC-04-2017-0057 y TC-07-2017-0014, relativos al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional y a la demanda en suspensión de ejecución, ambos incoados por el señor Serguei Guerassimenko y Elena Pirogova contra la Sentencia núm. 1223, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, el doce (12) de octubre de dos mil dieciséis (2016).



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

podrían subsanar si este Colectivo admitiera el recurso de revisión constitucional, analizara los documentos aportados en el expediente y se pronunciara sobre el fondo.

11. Ciertamente, la aplicación de una norma y sus consecuencias jurídicas no pueden conducir a la violación de derechos fundamentales; sin embargo, para quien disiente, esta afirmación no puede ser entendida en forma categórica porque podría desembocar en una *falacia* de la que sería difícil liberarse luego de ser incorporada como doctrina del Tribunal Constitucional.

12. El contexto en el que se emplea el término *falacia* es el de la argumentación jurídica, en la que se alude a un tipo de justificación que, si bien aparenta ser jurídicamente válida, en esencia no lo es. En ese sentido, cuando este Tribunal expone que cuando los tribunales del orden judicial apliquen las normas legales vigentes no se puede asumir esta actuación como violatoria a los derechos fundamentales de los justiciables, parte de una premisa en principio verdadera, pero que deja de lado que una norma legal instituida por el legislador pudiera ser mal interpretada por el juez o que el supuesto de hecho pudiera ser valorado de manera incorrecta, en cuyos casos podría violarse un derecho fundamental o dejar de tutelarlos.

13. Para ATIENZA⁶,

hay argumentos que tienen la apariencia de ser buenos, pero que no lo son, y a los que tradicionalmente se ha denominado “falacias”. A veces

⁶ ATIENZA, MANUEL. *Curso de Argumentación Jurídica*. Editora Trotta, S.A., 2013, página 116-117. Sigue sosteniendo el citado autor que “el estudio de las falacias resulta especialmente importante por la capacidad de engaño que envuelven, al tener esa apariencia de ser buenos argumentos; Aristóteles, en *Refutaciones sofisticas* (Aristóteles 1982), decía que eran como los metales que parecían preciosos sin serlo. Por otro lado, el que usa una falacia puede hacerlo a sabiendas de que es un mal argumento, con el propósito de engañar (cabría hablar entonces de *sofisma*), o bien de buena fe sin ser consciente del engaño que supone (*paralogismo*)”.

Expedientes números TC-04-2017-0057 y TC-07-2017-0014, relativos al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional y a la demanda en suspensión de ejecución, ambos incoados por el señor Serguei Guerassimenko y Elena Pirogova contra la Sentencia núm. 1223, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, el doce (12) de octubre de dos mil dieciséis (2016).



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

se clasifican en falacias formales e informales, pero, siguiendo las tres perspectivas que hemos distinguido, podríamos agruparlas en falacias formales (lógicas), materiales y pragmáticas. Una falacia formal tiene lugar cuando parece que se ha utilizado una regla de inferencia válida, pero en realidad no ha sido así; por ejemplo, la falacia de la afirmación del consecuente (que iría contra una regla de la lógica deductiva) o de la generalización precipitada (contra una regla de la inducción). En las falacias materiales, la construcción de las premisas se ha llevado a cabo utilizando un criterio sólo aparentemente correcto; ejemplos típicos podrían ser la falacia de la ambigüedad o de la falsa analogía. Y en las falacias pragmáticas, el engaño se produce por haber infringido, en forma más o menos oculta, algunas de las reglas que rigen el comportamiento de quienes argumentan, en el marco de discurso dialéctico o retórico [...].

14. La forma de argumentación que utiliza esta decisión logra la conexión entre el órgano productor de la norma y el que la aplica; luego pasa a extraer por vía de deducción que si el aplicador del derecho hace uso de una regla vigente para resolver el caso concreto jamás podría pensarse que semejante actividad puede vulnerar un derecho, en la medida en que estaríamos frente a la trípede sobre la cual descansa una decisión judicial: una norma legal, un supuesto de hecho, y finalmente, una labor de adecuación realizada por órgano habilitado para ello.

15. En la sentencia se da por cierta la afirmación *la aplicación, en la especie, de la norma precedentemente descrita ha sido apegada a lo dispuesto por el legislador y, en consecuencia, no es imputable a la Suprema Corte de Justicia la comisión de una acción o una omisión cuya consecuencia haya sido la violación de un derecho fundamental*, aun cuando esta cuestión no depende de quien argumenta, sino, más bien, de quien recurre, pues este último es el que

Expedientes números TC-04-2017-0057 y TC-07-2017-0014, relativos al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional y a la demanda en suspensión de ejecución, ambos incoados por el señor Serguei Guerassimenko y Elena Pirogova contra la Sentencia núm. 1223, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, el doce (12) de octubre de dos mil dieciséis (2016).



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

imputa o no la violación, mientras que al Tribunal Constitucional le corresponde determinarla; y así, sucesivamente, se va construyendo el argumento falaz con apariencia de ser verdadero.

16. A mi juicio, los conceptos desarrollados en relación a la consecuencia de la aplicación de una norma jurídica, cualquiera que fuese su contenido, debe partir de la tesis de que, si bien corresponde a los órganos jurisdiccionales su aplicación para resolver un caso concreto, esta potestad, como hemos dicho, es solo en principio, puesto que este colegiado conserva siempre la facultad de revisar la interpretación que en su labor de concreción del derecho éstos realizan. Así ha sido expuesto en algunas decisiones de este Tribunal en las que se ha sostenido que *adscribirle significado a la interpretación de la norma constituye un ejercicio que entra en la facultad de los jueces, siempre que el mismo no desborde los límites que le imponen la Constitución y la ley [...]*⁷; y es que en un Estado de derecho, la actividad de impartir justicia tiene límites implícitos y explícitos en los valores y principios que la Constitución protege.

17. En cualquier circunstancia, como hemos dicho, pueden producirse yerros por parte de quienes deben valorar los elementos fácticos y jurídicos de los procesos que se deciden ante el órgano jurisdiccional, lo que podría implicar alguna violación de derechos fundamentales; y la única garantía de que esos derechos puedan ser salvaguardados es la existencia de un órgano extra-poder con facultad para producir la revisión de esos fallos y adoptar la decisión que la Constitución y la Ley Orgánica prevén en cada situación concreta, siendo ésta la razón de ser de este Tribunal y del recurso de revisión de decisión jurisdiccional.

⁷ TC/0006/14 del 14 de enero de 2014, página 29. En esta sentencia se expone, además, que *“los jueces, en su labor intelectual, parten de la premisa que les aporta la ley para aplicarla a la cuestión fáctica que se presenta, para luego extraer de su análisis la inferencia lógica que formulan mediante conclusiones en la decisión que resuelve el caso concreto”*.

Expedientes números TC-04-2017-0057 y TC-07-2017-0014, relativos al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional y a la demanda en suspensión de ejecución, ambos incoados por el señor Serguei Guerassimenko y Elena Pirogova contra la Sentencia núm. 1223, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, el doce (12) de octubre de dos mil dieciséis (2016).



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

18. Un ejemplo de ello es la sentencia TC/0427/15, del treinta (30) de octubre de dos mil quince (2015), en la que este Tribunal resolvió el fondo de la revisión interpuesta contra una decisión que había pronunciado la caducidad del recurso en virtud del artículo 7 de la Ley 3726, y que luego de evaluar el fondo comprobó que la parte recurrente sí había notificado el recurso a la parte intimada en casación, de modo que estableciéndose la existencia del referido acto y habiéndose verificado como una realidad procesal incontrovertible a la que dio cumplimiento el parte recurrente, se acreditaba la vulneración del debido proceso y la tutela judicial efectiva al producirse el aniquilamiento del recurso interpuesto a consecuencia de la caducidad pronunciada por la Suprema Corte de Justicia.

19. En otros argumentos desarrollados en la citada sentencia TC/0427/15, este colegiado consideró

[...] que si bien en la especie el recurrente ejerció el derecho al recurso a través de la instancia depositada en la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia el 11 de diciembre de 2009, la decisión adoptada por error o por inobservancia del órgano que la ha dictado, condujo a cercenar el recurso y por tanto su derecho a que el fallo fuese revisado de conformidad con las normas que regulan el procedimiento de casación previsto en la citada ley núm. 3726; continúa exponiendo esa decisión que [...] la falta de ponderación de un documento fundamental para decidir la suerte del proceso supone una violación del derecho de defensa de la parte que lo ha aportado, máxime cuando en la especie la inobservancia de su existencia constituyó la razón determinante para producir la caducidad, que al ser decidida administrativamente coloca al recurrente en un supuesto que no se corresponde con la realidad procesal que le era aplicable.



República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

20. En el caso expuesto, si el Tribunal hubiese resuelto la cuestión declarando inadmisibile el recurso de revisión constitucional, por considerar que la Suprema Corte de Justicia aplicó una norma legal, no hubiese ejercido una de las funciones que le asigna la Constitución: proteger los derechos fundamentales de las personas.

III. EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y EL PRECEDENTE VINCULANTE

21. En virtud de lo expuesto anteriormente, en lo adelante abordaré el precedente, su fuerza vinculante constitucionalmente prevista y su vinculación con los poderes públicos.

22. En los sistemas constitucionales donde la jurisprudencia es una fuente directa del Derecho, el *precedente* se constituye en obligatorio por la fuerza vinculante tanto horizontal (Tribunal Constitucional o tribunales judiciales de su misma jerarquía) como vertical (para los tribunales de grado inferior y demás órganos del Estado), caracterizando así la diferencia esencial entre el precedente y la jurisprudencia. Si bien la jurisprudencia constituye la doctrina desarrollada por el Tribunal Constitucional a tenor de su labor resolutive, mediante la integración e interpretación de las leyes y reglamentos conforme a las disposiciones de la Constitución, el precedente ejerce un poder normativo que se materializa con la extracción de una norma a partir de un caso concreto.

23. Para BAKER, *precedente* o *stare decisis* significa que *los tribunales inferiores deben acatar las decisiones del tribunal supremo dentro de su jurisdicción en asuntos de Derecho, y que este último debe apartarse de sus decisiones previas o antecedentes sobre materias legales únicamente cuando*



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

*existen razones importantes para hacerlo*⁸; por su parte, MESÍA RAMÍREZ lo concibe como una regla general aplicable de manera obligatoria a los procesos futuros análogos que alcanza a los justiciables y es oponible a los poderes públicos⁹. La acepción dada por MESÍA RAMÍREZ tiene un alcance más amplio que el de BAKER, pues expresa la sujeción de todos los poderes públicos a lo decidido por el Tribunal Constitucional; y es coherente con las disposiciones del artículo 184 de la Constitución que dispone que las decisiones del Tribunal Constitucional *son definitivas e irrevocables, y constituyen precedentes vinculantes para todos los poderes públicos y órganos del Estado.*

24. Lo anterior implica que el propio tribunal debe ceñirse a sus decisiones previas y respetarlas, a no ser que existan motivos de importancia que le obliguen a desligarse del precedente, en cuyo caso debe exponer los fundamentos de hecho y de derecho que le conducen a modificar su criterio, tal como lo indica el párrafo I del artículo 31 de la Ley núm. 137-11. De acuerdo a BAKER, [...] *la adhesión absoluta al precedente podría impedir la corrección de errores manifiestos, y haría necesaria la aplicación de regulaciones que eran apropiadas en su momento, pero cuya raison d'être (razón de ser) dejó de existir tiempo atrás*¹⁰; en otras palabras, el cambio tiene razón de ser en la medida en que permite enmendar desaciertos o dar respuesta a un conflicto suscitado en un estado social o político distinto.

25. El apego a los precedentes se sostiene en la importancia de generar estabilidad en el sistema de precedentes y en dotarlo de seguridad jurídica; en primer orden, para que las decisiones del Tribunal sean respetadas por el propio tribunal (autoprecedente) y por los demás poderes público, y en segundo orden,

⁸ BAKER, ROBERT S. (2009). El Concepto de Precedente y su Significado en el Derecho Constitucional de los Estados Unidos. *Revista Peruana de Derecho Público*, 19 (10), 13-40.

⁹ MESÍA-RAMÍREZ, CARLOS. (2013). *Exégesis del Código Procesal Constitucional*. (p.140, 4ta. ed.). Lima: Editorial El Búho, E.I.R.L.

¹⁰ Op.cit. p.27

Expedientes números TC-04-2017-0057 y TC-07-2017-0014, relativos al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional y a la demanda en suspensión de ejecución, ambos incoados por el señor Serguei Guerassimenko y Elena Pirogova contra la Sentencia núm. 1223, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, el doce (12) de octubre de dos mil dieciséis (2016).



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

para proveer a los ciudadanos la certeza de que ante hechos similares se aplicarán las mismas consecuencias jurídicas.

26. El autoprecedente, según afirma GASCÓN¹¹,

procede de las decisiones previas adoptadas por el mismo juez o tribunal que ahora tiene que decidir y lo concibe como un instrumento contra la arbitrariedad o, lo que es lo mismo, una garantía de racionalidad, y por consiguiente es consustancial a la tarea judicial, independientemente de las particularidades del sistema jurídico en que dicha actividad se desarrolla. A su juicio, la doctrina del autoprecedente debe ser entendida como una traslación del principio Kantiano de universalidad al discurso jurídico de los jueces y tribunales, pues lo que dicho principio expresa es la exigencia de que exista una única solución correcta para los mismos supuestos y eso precisamente –aunque formulado con otros términos- es lo que representa la regla del autoprecedente.

27. La fuerza normativa del precedente viene dada por el vínculo en virtud del cual el juez se ve inducido a aplicar al nuevo caso el principio mismo de Derecho que fue objeto de aplicación anterior; esto así porque *prima facie* los efectos de los precedentes se asemejan a los de la ley, en el sentido de que al ser concebido como regla general, puede ser invocado por cualquier persona ante cualquier órgano, debido al efecto vinculante de las decisiones del Tribunal Constitucional.

28. El sistema de precedentes tiene numerosas ventajas en un sistema judicial, pues los órganos de los poderes públicos, especialmente los tribunales,

¹¹ GASCÓN, MARINA. (2011). Racionalidad y (auto) precedente. Breves consideraciones sobre el fundamento e implicaciones de la regla del autoprecedente. Recuperado de <https://www.tribunalconstitucional.gob.do/sites/default/files//DRA.%20MARINA%20GASCON.pdf>

Expedientes números TC-04-2017-0057 y TC-07-2017-0014, relativos al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional y a la demanda en suspensión de ejecución, ambos incoados por el señor Serguei Guerassimenko y Elena Pirogova contra la Sentencia núm. 1223, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, el doce (12) de octubre de dos mil dieciséis (2016).



República Dominicana

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

cuentan con una herramienta valiosa para la solución de los conflictos. El precedente se convierte en una técnica indispensable para el mantenimiento de la coherencia en la aplicación del ordenamiento jurídico dentro del sistema constitucional, especialmente cuando se trata de interpretación y aplicación de las normas de la Constitución (Santibáñez).

29. En ese sentido, la espina dorsal del precedente estriba en su obligatoria repercusión en la solución de futuros casos análogos tanto para el Tribunal como para el resto de los poderes públicos. Un sistema constitucional que asuma esta institución cuenta con un mecanismo que cumple funciones esenciales en el ordenamiento jurídico del Estado, especialmente para garantizar el mantenimiento del Estado de Derecho.

30. Con el debido respeto, es conveniente que este Tribunal Constitucional procure la constancia en su labor doctrinaria, de manera que en los casos en que se produzca algún cambio de precedente, proceda a explicar las razones que lo motivan, a los fines de colocar a la comunidad jurídica y de intérpretes en posición de prever, a partir del nuevo precedente, el modo de accionar de este Colegiado.

IV. CONCLUSIÓN

31. Esta opinión va dirigida a señalar que este Colegiado debió pronunciarse sobre la presunta vulneración de los derechos debido proceso y tutela judicial efectiva, invocados por Serguei Guerassimenko y Elena Pirogova; razones por las que disiento de la decisión adoptada por los honorables jueces de este Tribunal.

Firmado: Lino Vásquez Samuel, juez, segundo Sustituto



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

**VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO JUSTO PEDRO
CASTELLANOS KHOURY**

Con el debido respeto hacia el criterio mayoritario reflejado en la sentencia, y coherentes con la opinión que mantuvimos en la deliberación, ejercemos la facultad prevista en el artículo 186 de la Constitución y, en tal sentido, presentamos nuestro voto particular, fundado en las razones que expondremos a continuación:

1. En la especie, Serguei Guerassimenko y Elena Pirogova interpusieron un recurso de revisión de decisión jurisdiccional contra la sentencia número 1233, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia en fecha 12 de octubre de 2016. El Tribunal Constitucional declaró inadmisibile el recurso porque en la especie no se cumple con el requisito exigido en el artículo 53.3.c) de la ley número 137-11, en el sentido de que la supuesta violación a derechos fundamentales no se le puede imputar a la Suprema Corte de Justicia, por inadmitir el recurso de casación en aplicación de la norma procesal que lo regula.

2. Estamos de acuerdo con que, en la especie, el recurso de revisión de decisión jurisdiccional debe inadmitirse; sin embargo, el fundamento de tal inadmisión debe versar en que no ha sido demostrada la violación a derecho fundamental alguno de los recurrentes, conforme a los términos del artículo 53.3, el cual, en la especie, para determinar la indicada inadmisibilidad, no ha sido manejado correctamente por la mayoría del Tribunal.

I. SOBRE EL ARTÍCULO 53

3. El artículo 53 instaaura un nuevo recurso, el de revisión de decisión jurisdiccional y, al hacerlo, establece también, los requisitos para su admisión.

Expedientes números TC-04-2017-0057 y TC-07-2017-0014, relativos al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional y a la demanda en suspensión de ejecución, ambos incoados por el señor Serguei Guerassimenko y Elena Pirogova contra la Sentencia núm. 1223, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, el doce (12) de octubre de dos mil dieciséis (2016).



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

A. Sobre el contenido del artículo 53

4. Dicho texto reza:

El Tribunal Constitucional tendrá la potestad de revisar las decisiones jurisdiccionales que hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, con posterioridad al 26 de enero de 2010, fecha de proclamación y entrada en vigencia de la Constitución, en los siguientes casos:

1) Cuando la decisión declare inaplicable por inconstitucional una ley, decreto, reglamento, resolución u ordenanza.

2) Cuando la decisión viole un precedente del Tribunal Constitucional.

3) Cuando se haya producido una violación de un derecho fundamental, siempre que concurren y se cumplan todos y cada uno de los siguientes requisitos:

a) Que el derecho fundamental vulnerado se haya invocado formalmente en el proceso, tan pronto quien invoque la violación haya tomado conocimiento de la misma.

b) Que se hayan agotado todos los recursos disponibles dentro de la vía jurisdiccional correspondiente y que la violación no haya sido subsanada.

c) Que la violación al derecho fundamental sea imputable de modo inmediato y directo a una acción u omisión del órgano jurisdiccional, con independencia de los hechos que dieron lugar al proceso en que



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

dicha violación se produjo, los cuales el Tribunal Constitucional no podrá revisar.

Párrafo.- La revisión por la causa prevista en el Numeral 3) de este artículo sólo será admisible por el Tribunal Constitucional cuando éste considere que, en razón de su especial trascendencia o relevancia constitucional, el contenido del recurso de revisión justifique un examen y una decisión sobre el asunto planteado. El Tribunal siempre deberá motivar sus decisiones.

5. Conviene detenerse en la redacción de estos párrafos. Todos se refieren a situaciones cumplidas, concretadas. No se trata, pues, de que, por ejemplo, en la causal segunda (53.2), el recurrente alegue que la decisión recurrida viola un precedente del Tribunal Constitucional, sino de que, efectivamente *“la decisión viole un precedente del Tribunal Constitucional”*. Ni de que, para poner otro ejemplo relativo a la causal tercera (53.3), el recurrente alegue la violación de un derecho fundamental, sino de que, efectivamente, *“se haya producido una violación de un derecho fundamental”*.

6. Según el texto, el punto de partida es que *“se haya producido una violación de un derecho fundamental”* (53.3) y, a continuación, en términos similares: *“Que el derecho fundamental vulnerado se haya invocado (...)”* (53.3.a); *“Que se hayan agotado todos los recursos disponibles (...) y que la violación no haya sido subsanada”* (53.3.b); y *“Que la violación al derecho fundamental sea imputable (...) con independencia de los hechos que dieron lugar al proceso en que dicha violación se produjo (...)”*¹² (53.3.c).

¹² En este documento, todas las negritas y los subrayados son nuestros.



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

7. Resaltamos, en efecto, particularmente respecto del 53.3 y de sus literales, la coherencia de su redacción, o bien *"la lógica interna de la norma (...), la uniformidad y precisión en el uso del idioma"*.¹³ Reconocemos que el suyo no es el caso *"criticable"*¹⁴ de un texto que titubea *"entre el uso de uno y otro tiempo, combinando ambos en un mismo artículo sin ninguna razón aparente"*¹⁵, sino el de uno que tiene lo que todo texto normativo debe tener: *"una estructura lógica y coherente que lo identifique como tal y que, al mismo tiempo, facilite su inteligibilidad"*.¹⁶ Vista su claridad, es, pues, posible y pertinente hacer una interpretación literal del mismo.

8. Es conveniente establecer que este recurso ha sido *"diseñado en base al modelo del amparo constitucional español, y que la LOTCPC ha copiado casi literalmente de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional español"*;¹⁷ nuestro artículo 53.3 procede del artículo 44 español,¹⁸ mientras que el párrafo del artículo 53 procede del artículo 50 de la referida ley española.¹⁹

¹³ Guzmán Ariza, Fabio J. *El lenguaje de la Constitución dominicana*, Academia Dominicana de la Lengua- Gaceta Judicial; Editora Corripio, Santo Domingo, 2012, pp. 22- 23.

¹⁴ Guzmán Ariza, Fabio J., Op. cit., p. 77.

¹⁵ *Ibíd.*

¹⁶ Guzmán Ariza, Fabio J. Op. cit., p. 91.

¹⁷ Jorge Prats, Eduardo. *Comentarios a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los procedimientos constitucionales*. IUS NOVUM, Amigo del Hogar, 2011, p. 125. Dicha ley española fue modificada por la Ley No. 6/2007.

¹⁸ Dice el artículo 44 español: *"1. Las violaciones de los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional, que tuvieran su origen inmediato y directo en un acto u omisión de un órgano judicial, podrán dar lugar a este recurso siempre que se cumplan los requisitos siguientes:*

"a) Que se hayan agotado todos los medios de impugnación previstos por las normas procesales para el caso concreto dentro de la vía judicial.

"b) Que la violación del derecho o libertad sea imputable de modo inmediato y directo a una acción u omisión del órgano judicial con independencia de los hechos que dieron lugar al proceso en que aquellas se produjeron, acerca de los que, en ningún caso, entrará a conocer el Tribunal Constitucional.

"c) Que se haya denunciado formalmente en el proceso, si hubo oportunidad, la vulneración del derecho constitucional tan pronto como, una vez conocida, hubiera lugar para ello". (Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Concordancias, comentarios y jurisprudencia. Editora COLEX, España, segunda edición, 2008, p. 182)

¹⁹ Dice el artículo 50.1.b) español: *"Que el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales"*. (Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Concordancias, comentarios y jurisprudencia. Editora COLEX, España, segunda edición, 2008, pp. 277- 278).

Expedientes números TC-04-2017-0057 y TC-07-2017-0014, relativos al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional y a la demanda en suspensión de ejecución, ambos incoados por el señor Serguei Guerassimenko y Elena Pirogova contra la Sentencia núm. 1223, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, el doce (12) de octubre de dos mil dieciséis (2016).



República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

B. Sobre la naturaleza del recurso de revisión de decisión jurisdiccional, consagrado en el artículo 53

9. Como hemos visto, el artículo 53 inicia estableciendo que: *“El Tribunal Constitucional tendrá la potestad de revisar las decisiones jurisdiccionales que hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, con posterioridad al 26 de enero de 2010, fecha de proclamación y entrada en vigencia de la Constitución en los siguientes casos (...)”*.

10. Interesa detenernos en estas primeras líneas suyas, para derivar una primera cuestión: la facultad del Tribunal Constitucional para revisar decisiones es, de entrada, limitada, pues opera solamente en relación con aquellas que cumplan con tres requisitos, dos de carácter cualitativo –(i) que sea una decisión jurisdiccional; y (ii) que la decisión haya adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada-, y otro de carácter temporal –(iii) que la decisión recurrida haya adquirido esta última calidad con posterioridad al 26 de enero del 2010-.

11. A pesar de que las disposiciones señaladas no parecen representar mayores dificultades en su aplicación, entendemos de suma importancia analizar el alcance de cada una, para determinar cuáles son los límites que el constituyente y el legislador han impuesto al Tribunal Constitucional con respecto a las decisiones que podrá revisar. Analizaremos únicamente los requisitos (ii) y (iii), relativos a la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, ya que, para este caso en particular, por su obviedad, no es relevante el carácter de *“jurisdiccional”* de la decisión.



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

C. Un paréntesis necesario sobre la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, requerida para la admisión de los recursos de revisión de decisión jurisdiccional.

12. En cuanto al segundo requisito, referido en el precedente numeral 11 – que la decisión haya adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada-, Froilán Tavares explica de manera extensa cuándo una decisión adquiere la autoridad de la cosa juzgada y, asimismo, cuándo adquiere la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. En cuanto a la autoridad de cosa juzgada señala que *“mientras la sentencia sea susceptible de ser atacada por las vías ordinarias de recurso, oposición o apelación, su autoridad de cosa juzgada es puramente provisional, y que es suspendida si uno de esos recursos es ejercitado”*.²⁰

13. Posteriormente precisa que

*[c]uando estos recursos ordinarios han sido incoados infructuosamente, o cuando el plazo para interponerlos ha expirado, se dice que la sentencia ha “pasado en autoridad de cosa juzgada” o que ha “adquirido la autoridad de la cosa juzgada”. Cuando no es susceptible de ser impugnada por una vía extraordinaria de recurso, revisión civil o casación, se dice que la sentencia es “irrevocable”.*²¹

14. A forma de ejemplo señala que *“una sentencia contradictoria en primera instancia tiene inmediatamente autoridad de cosa juzgada, pasa en autoridad de cosa juzgada y llega al mismo tiempo a ser irrevocable si no es objeto de apelación en el plazo correspondiente”*.²² Asimismo dice que una sentencia

²⁰ Tavares, Froilán. *Elementos de derecho procesal civil dominicano*; volumen II, octava edición, p. 444.

²¹ *Ibíd.*

²² Tavares, Froilán. *Op. cit.*, p. 445.



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

“llega a ser irrevocable cuando ya no puede ser impugnada por ninguna vía extraordinaria, o cuando éstas hayan sido ejercidas infructuosamente”.²³

15. De igual forma pone el ejemplo de una sentencia dictada en única instancia en defecto y explica que *“una sentencia en defecto en única o última instancia, tiene de inmediato autoridad de cosa juzgada, pasa en fuerza de cosa juzgada cuando no es impugnada por oposición o cuando la oposición es desestimada, y **vendrá a ser irrevocable cuando los recursos extraordinarios hayan sido desestimados**”*.²⁴

16. Tomando en cuenta todo lo anterior, debemos concluir que la calidad de la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada adquirida por una sentencia, no implica necesariamente que esta haya sido dada por la Suprema Corte de Justicia. O bien, implica que una sentencia puede adquirir la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, aunque no haya sido emitida por la Suprema Corte de Justicia. De hecho, como se ha dicho, una sentencia dictada en primera instancia, si no es recurrida dentro de los plazos establecidos por la ley, adquiere la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada; asimismo, si se interpone uno de los recursos extraordinarios que la ley disponga contra la misma y el recurso es desestimado, también la decisión adquiere la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada.

17. En este sentido, es fundamental subrayar, además, que el hecho de que una decisión haya adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada no implica que se hayan agotado todos los recursos jurisdiccionales disponibles. En realidad, se trata de dos conceptos distintos y con implicaciones diferentes.

²³ *Ibíd.*

²⁴ Tavares, Froilán. *Op. cit.*, p. 445.

Expedientes números TC-04-2017-0057 y TC-07-2017-0014, relativos al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional y a la demanda en suspensión de ejecución, ambos incoados por el señor Serguei Guerassimenko y Elena Pirogova contra la Sentencia núm. 1223, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, el doce (12) de octubre de dos mil dieciséis (2016).



República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

18. En efecto, siempre conforme los términos de la Ley No. 137-11, el requisito de que se hayan agotado todos los recursos disponibles en el sistema legal es uno muy particular que solo aplica para aquellos recursos de revisión que se interpongan en virtud de la causal tercera establecida en el artículo 53 de la Ley No. 137-11 (artículo 53.3), es decir, en virtud de que se haya producido la violación de un derecho fundamental; y no aplica para las causales primera (artículo 53.1) ni segunda (artículo 53.2) de revisión de decisiones jurisdiccionales; por lo que de ninguna manera puede establecerse como un requisito de carácter general para todos los recursos de revisión de decisiones jurisdiccionales.

19. El tercer requisito, al que nos referimos también en el numeral 12 –que la decisión jurisdiccional haya adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada con posterioridad al 26 de enero de 2010-, se encuentra contenido, como hemos visto, tanto en el artículo 277 de la Constitución como en la parte capital del artículo 53 de la Ley No. 137-11.

20. De la lectura de dichos artículos debemos entender que el requisito consiste en que la decisión **haya adquirido** la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada con posterioridad al 26 de enero del 2010. Dichos textos, en efecto, no establecen que la decisión debe haber sido **dictada** luego de la fecha indicada, sino que la condición de autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada debe haber sido **adquirida** con posterioridad a esta fecha. ¿Cuál es la importancia de esta precisión?

21. Efectivamente, tan pronto una decisión definitiva es dictada por la Suprema Corte de Justicia adquiere inmediatamente la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada; por lo cual, en ese escenario el momento en que se dicta la sentencia y el momento en el que la misma adquiere la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, es exactamente el mismo. No obstante, y como

Expedientes números TC-04-2017-0057 y TC-07-2017-0014, relativos al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional y a la demanda en suspensión de ejecución, ambos incoados por el señor Serguei Guerassimenko y Elena Pirogova contra la Sentencia núm. 1223, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, el doce (12) de octubre de dos mil dieciséis (2016).



República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

explicamos previamente, una decisión no adquiere la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada únicamente cuando es dictada por la Suprema Corte de Justicia, pues existen otros escenarios en los cuales una decisión puede adquirir dicha condición.

22. He ahí la importancia de identificar y distinguir estos dos conceptos, garantizando su correcta y justa aplicación. A forma de ejemplo, analicemos el caso de una decisión de apelación que haya sido dictada en diciembre de 2009, recurrida en casación en tiempo hábil y rechazado –este recurso- en el 2013. Si tomamos como referencia la fecha en que se dictó la decisión de apelación, entonces esta, que ya adquirió la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, no podría ser revisada por el Tribunal Constitucional, porque fue **dictada** antes de enero del 2010. Sin embargo, si nos suscribimos a la literalidad de los textos referidos y tomamos en cuenta el momento en que la decisión de apelación adquirió la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, que fue cuando la Suprema Corte de Justicia rechazó el recurso de casación, es decir, en el 2013, entonces vemos que se trata de una decisión de una Corte de Apelación que podría ser revisada por el Tribunal Constitucional, siempre que cumpla con los demás requisitos que veremos más adelante.

D. De vuelta con la naturaleza del recurso de revisión de decisión jurisdiccional.

23. Continuando con el análisis de la parte capital del artículo 53, la parte inicial del texto plantea que el recurso será posible “*en los siguientes casos*”, expresión que es obviamente excluyente en el sentido de que tal posibilidad recursiva sólo será posible en los casos que ella señala.

Expedientes números TC-04-2017-0057 y TC-07-2017-0014, relativos al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional y a la demanda en suspensión de ejecución, ambos incoados por el señor Serguei Guerassimenko y Elena Pirogova contra la Sentencia núm. 1223, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, el doce (12) de octubre de dos mil dieciséis (2016).



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

24. Este recurso es extraordinario, en razón de que no procede para plantear cualquier cuestión, sino única y exclusivamente aquellas dispuestas de manera expresa por dicho texto.

25. Este recurso es, además, subsidiario, en el caso particular de la causal tercera establecida en el artículo 53.3, la cual analizaremos posteriormente, en vista de que, como exige el artículo 53.3. a), el derecho fundamental vulnerado debe haberse incoado previamente en el proceso y, como plantea el 53.3.b), deben haberse agotado todos los recursos disponibles sin que la violación haya sido subsanada.

26. Y, sobre todo, este recurso “*es claramente un recurso excepcional”*²⁵, porque en él no interesa

ni debe interesar la disputa o conflicto que subyace al mismo, sino únicamente si en la resolución de dicho conflicto se han vulnerado o no derechos fundamentales. No es la administración de justicia lo que interesa, sino que no haya fallos en el procedimiento de administración de justicia en lo que a derechos fundamentales y libertades públicas se refiere”.²⁶

Este recurso, en efecto, ha sido diseñado para ser interpuesto cuando “*falla la garantía de la protección de los derechos, para corregir los errores que se pueden cometer en el interior del sistema de protección de los derechos diseñado por el constituyente*”.²⁷

²⁵ Jorge Prats, Eduardo Op. Cit., p. 125.

²⁶ Pérez Royo, Javier. *Curso de Derecho Constitucional*. En: Jorge Prats, Eduardo. Op. cit., pp. 126- 127.

²⁷ Pérez Royo, Javier. *Curso de Derecho Constitucional*. En: Jorge Prats, Eduardo. Op. cit., p. 126.



República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

27. Se trata de un recurso que, al tiempo de satisfacer determinadas necesidades del sistema de justicia -sobre todo las surgidas con la nueva estructura judicial e institucional proñijada por la Constitución de 2010, particularmente por la entrada a juego del Tribunal Constitucional y su rol como órgano de cierre del sistema de justicia-, garantiza su integridad y funcionalidad. Tal es la razón por la que, al tiempo de abrir esta posibilidad recursiva, la misma, conforme su naturaleza excepcional, queda sujeta a unas condiciones particularmente exigentes y rigurosas, excepcionales en el universo normativo de dicha ley.

E. Sobre el sentido del artículo 53 y la naturaleza de su contenido.

28. Así, el artículo 53 establece, aparte de los requisitos de admisibilidad enunciados previamente, las causales por las que el recurso de revisión de decisión jurisdiccional puede ser admitido. Estas son independientes entre sí; constituyen llaves que abren por separado la posibilidad de que una decisión sea revisada. Son tres:

29. La primera (53.1) es: *"Cuando la decisión declare inaplicable por inconstitucional una ley, decreto, reglamento, resolución u ordenanza"*.

30. La segunda (53.2) es: *"Cuando la decisión viole un precedente del Tribunal Constitucional"*.

31. En virtud de que al Tribunal todavía no se le han presentado recursos de revisión de decisión jurisdiccional en esos dos escenarios y de que la especie se refiere a la causal establecida en el artículo 53.3, focalizaremos nuestra atención en esta última, que es: *"Cuando se haya producido una violación de un derecho fundamental"*. Aquí, el requisito es que se haya producido la violación a un derecho fundamental. Así, antes de analizar si se cumplen con los supuestos a

Expedientes números TC-04-2017-0057 y TC-07-2017-0014, relativos al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional y a la demanda en suspensión de ejecución, ambos incoados por el señor Serguei Guerassimenko y Elena Pirogova contra la Sentencia núm. 1223, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, el doce (12) de octubre de dos mil dieciséis (2016).



República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

los que este numeral subordina la admisibilidad del recurso, es preciso verificar si, en efecto, se produjo una violación a un derecho fundamental.

32. Si se verifica que no se ha producido, no es necesario continuar analizando los requisitos siguientes y el Tribunal debe inadmitir el recurso. Como explicamos antes, no se trata de verificar que el recurrente *haya alegado la vulneración* de un derecho fundamental, sino de comprobar que, en efecto, se produjo la vulneración a un derecho fundamental. Tales son los términos del artículo 53, especialmente del 53.3; tal es, pues, el sentido que debe observar el Tribunal. Si el Tribunal se limitara a verificar que el recurrente haya alegado la violación de un derecho fundamental, el recurso sería admisible con mucha frecuencia, porque ésta es la alegación que usualmente formulan los recurrentes para acceder al recurso. Tal situación contradiría gravemente el propósito y la naturaleza del recurso y convertiría a este recurso en uno ordinario.

33. Es discutible, ciertamente, que en fase de admisión se proceda a comprobar la vulneración del derecho. En este sentido, pensamos que, en todo caso, y especialmente cuando se requiera el estudio y la ponderación de multiplicidad de pruebas y documentos, el Tribunal tiene, siempre conforme los términos del artículo 53 respecto de la admisibilidad del recurso, la obligación de, por lo menos, verificar la existencia de alguna evidencia que apunte a que hubo una vulneración de un derecho fundamental o que dicha vulneración sea discutible. Lo que en ningún caso puede hacer el Tribunal es admitir un recurso por el simple hecho de que el recurrente “alega” que se le vulneró un derecho, porque, como indicamos previamente, esto haría que el recurso fuera admisible muchas más veces de lo que en realidad es necesario en la justicia constitucional, retrasando procesos en los que es necesario que el Tribunal se pronuncie para garantizar la supremacía de la Constitución y la protección de los derechos fundamentales vulnerados.

Expedientes números TC-04-2017-0057 y TC-07-2017-0014, relativos al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional y a la demanda en suspensión de ejecución, ambos incoados por el señor Serguei Guerassimenko y Elena Pirogova contra la Sentencia núm. 1223, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, el doce (12) de octubre de dos mil dieciséis (2016).



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

34. Si, por el contrario, el Tribunal comprueba que se produjo la violación a un derecho fundamental, tendrá, entonces, que proceder a verificar que **“concurran y se cumplan todos y cada uno”** -son los términos del 53.3- de los requisitos exigidos para esta causal; a saber:

35. *“a) Que el derecho fundamental vulnerado se haya invocado formalmente en el proceso, tan pronto quien invoque la violación haya tomado conocimiento de la misma”*. En este sentido, el Tribunal tiene la obligación de verificar si el recurrente alegó la violación que hoy pretende subsanar en el momento en que tuvo conocimiento de la misma. Por tanto, tal y como indica la doctrina, no basta con que haya existido un proceso previo a la interposición del recurso, del que hayan conocido los tribunales ordinarios, sino que *“a estos se les ha tenido que dar la oportunidad efectiva de reparar la lesión de derechos denunciada, puesto que son los ‘garantes naturales’ de los derechos fundamentales”*²⁸. Si se comprueba que no se invocó, por mucho que se haya violado el derecho en cuestión, no se cumplirá este requisito y el Tribunal deberá inadmitir el recurso. Si, por el contrario, se verifica el cumplimiento de este requisito, el Tribunal deberá, entonces, pasar a comprobar el requisito siguiente.

36. *“b) Que se hayan agotado todos los recursos disponibles dentro de la vía jurisdiccional correspondiente y que la violación no haya sido subsanada”*. El Tribunal Constitucional español ha establecido que esta exigencia tiene por objeto permitir que los órganos jurisdiccionales puedan examinar y, en su caso, corregir la lesión del derecho fundamental. Y, en este sentido, ha precisado que no se trata de agotar *“todos los recursos imaginables en un examen de todo el ordenamiento procesal, sino aquellos que pueden conducir a remediar la lesión (...)”*.²⁹

²⁸ Pérez Tremps, Pablo. *Los procesos constitucionales. La experiencia española*; PALESTRA, Perú, 2006, p. 125.

²⁹ STC, 2 de diciembre de 1982.

Expedientes números TC-04-2017-0057 y TC-07-2017-0014, relativos al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional y a la demanda en suspensión de ejecución, ambos incoados por el señor Serguei Guerassimenko y Elena Pirogova contra la Sentencia núm. 1223, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, el doce (12) de octubre de dos mil dieciséis (2016).



República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

37. Si se verifica que el recurrente no agotó los recursos disponibles, no se cumple este requisito, el recurso debe ser inadmitido y, como en el caso anterior, no es necesario continuar el análisis de los demás requisitos. Si, por el contrario, el Tribunal comprueba el cumplimiento de este requisito, debe continuar, entonces, con la verificación del siguiente. Como se aprecia, y ya habíamos adelantado, el agotamiento de los recursos disponibles no es un requisito general para todos los recursos de revisión que se interpongan por ante el Tribunal Constitucional, sino que es un requisito de admisibilidad para los recursos que se introducen por la causal tercera, establecida en el artículo 53.3, es decir, que “se haya producido la violación de un derecho fundamental”.

38. En relación con este artículo 53.3.b), es preciso verificar dos situaciones: (i) si los recursos que existen dentro del sistema legal han sido agotados por el recurrente; y (ii) si, aun agotados dichos recursos, la violación no ha sido subsanada.

39. En este sentido, el requerimiento no se refiere a que la sentencia provenga como resultado del último recurso posible dentro del ordenamiento jurídico, sino que el recurrente haya agotado los recursos disponibles y que, habiéndolos agotados, la violación persista. Por tanto, si, por ejemplo, la violación se produce por una actuación del tribunal de apelación, para que el recurso de revisión contra esa decisión sea admisible, el recurrente debe haber agotado previamente los demás recursos disponibles, en ese caso, el recurso de casación y que, además, la decisión de este último no haya subsanado la violación al derecho fundamental.

40. El tercer requisito que establece el artículo 53.3 es: *“Que la violación al derecho fundamental sea imputable de modo inmediato y directo a una acción u omisión del órgano jurisdiccional, con independencia de los hechos que dieron lugar al proceso en que dicha violación se produjo, los cuales el*

Expedientes números TC-04-2017-0057 y TC-07-2017-0014, relativos al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional y a la demanda en suspensión de ejecución, ambos incoados por el señor Serguei Guerassimenko y Elena Pirogova contra la Sentencia núm. 1223, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, el doce (12) de octubre de dos mil dieciséis (2016).



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Tribunal Constitucional no podrá revisar”. Lo anterior significa “*que o bien en la sentencia recurrida en revisión se violó el derecho fundamental o bien en dicha sentencia no se corrigió la vulneración del derecho efectuada en otras instancias*”.³⁰ En otras palabras, este requisito se refiere a que el órgano que dictó la decisión recurrida sea el responsable de que se haya producido la violación, bien sea porque no la subsanó cuando se le presentó, o porque haya producido la vulneración directamente. Si el Tribunal comprueba que la violación no es imputable en los términos de la ley, el requisito no se cumple, el recurso debe ser inadmitido y, como en los casos anteriores, no es necesario continuar con la comprobación del requisito siguiente. Si, por el contrario, se verifica el cumplimiento de este requisito, esto, sin embargo, todavía no será suficiente para admitir el recurso y debe determinar, entonces, lo que ordena el párrafo del artículo 53.

41. El párrafo dice: “La revisión por la causa prevista en el numeral 3) de este artículo sólo será admisible por el Tribunal Constitucional cuando este considere que, en razón de su especial trascendencia o relevancia constitucional, el contenido del recurso de revisión justifique un examen y una decisión sobre el asunto planteado. El tribunal siempre deberá motivar sus decisiones”. Este requisito “*confiere una gran discrecionalidad al Tribunal Constitucional a la hora de admitir la revisión*”,³¹ si bien ella no puede asimilarse a la arbitrariedad.

42. En este sentido, la expresión “*sólo será admisible*”, lejos de establecer que tal es el único requisito de admisibilidad contenido en el artículo 53, confirma, por el contrario, que los requisitos que el mismo contiene se refieren a la admisión del recurso. El sentido de la expresión es que, aun satisfechos todos los anteriores requisitos de admisibilidad, el recurso “*sólo será admisible*”

³⁰ Jorge Prats, Eduardo. Op. Cit., p. 128.

³¹ Jorge Prats, Eduardo. Op. Cit., p. 129.



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

si se reúne, también, este último, el de la especial trascendencia o relevancia constitucional. O bien, que los anteriores requisitos de admisibilidad no son suficientes sin este último.

43. En efecto, no nos parece razonable pensar que la admisibilidad del recurso, a la que la Ley consagra un artículo completo –el 53-, y una actuación particular –prevista en el 54, como veremos más adelante-, esté referida únicamente, como han planteado algunos, a lo que establece el párrafo del artículo 53. Recordemos, en este sentido, que esta exigencia es la misma que la Ley hace en el artículo 100 para el recurso de revisión constitucional de amparo, en cuyo caso, sin embargo, no consagra un procedimiento particular para su admisibilidad, como sí hace respecto de este recurso, para el cual exige la comprobación de todos los requisitos establecidos en el 53.3, incluida, por supuesto, la especial trascendencia o relevancia constitucional.

44. El significado del párrafo del artículo 53 no pudo ser mejor explicado por el académico y ex Magistrado del Tribunal Constitucional español, Manuel Aragón Reyes:

La vulneración de derechos ya no será suficiente, por sí sola, para otorgar (y antes, admitir) el amparo, sino sólo y exclusivamente si el caso posee esa 'especial trascendencia constitucional', cuya justificación 'expresa' (así debe interpretarse) es carga que, en la demanda, ha de soportar el recurrente (nuevo art. 49.1 LOTC), que habrá de entender, a partir de ahora, que no le bastará con justificar que la vulneración de derechos se ha producido, sino que su amparo sólo será admitido si justifica suficientemente en la demanda la especial trascendencia



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

constitucional del asunto y así es apreciada por el Tribunal Constitucional".³²

De manera que si, finalmente, el Tribunal aprecia que se ha producido la violación a un derecho fundamental y que se cumplen cada uno de los requisitos del artículo 53.3, incluido su párrafo, procederá, entonces -y sólo entonces, vale subrayar-, a admitir el recurso y, consecuentemente, a pronunciarse sobre el fondo, en cuyo caso deberá acogerlo o rechazarlo. Si el recurso es acogido, el Tribunal revocará la sentencia recurrida; identificará los derechos vulnerados, su violación y establecerá su criterio al respecto; y, conforme los artículos 54.9 y 54.10 de la Ley No. 137-11, remitirá el asunto al tribunal que dictó la sentencia anulada para que conozca *"nuevamente del caso, con estricto apego al criterio establecido por el Tribunal Constitucional en relación del derecho fundamental violado"*. Si el recurso es rechazado, el Tribunal confirmará la sentencia recurrida.

45. En fin, que, en el orden previsto por el texto legal, siguiendo la lógica de su estructura, el Tribunal determina, primero, a cuál de los tres escenarios lo conduce el contenido del recurso. Colocado en el tercer escenario (53.3), procede entonces a verificar los requisitos cuyo cumplimiento se exige para entrar a este y, una vez en él, tomar las decisiones que correspondan.

46. No nos parece correcto operar en otro sentido. Determinar, por ejemplo, que se cumple lo dispuesto en el párrafo, respecto de la especial trascendencia y relevancia constitucional, sin antes haber establecido que se cumple *"la causa*

³² Aragón Reyes, Manuel. *La reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional*; Revista Española de Derecho Constitucional, número 85, enero- abril 2009, p. 35. En la más reciente modificación a esta ley, en 2007, se estableció la obligación, a cargo del recurrente, de justificar expresamente la especial trascendencia y relevancia constitucional del asunto planteado.

Expedientes números TC-04-2017-0057 y TC-07-2017-0014, relativos al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional y a la demanda en suspensión de ejecución, ambos incoados por el señor Serguei Guerassimenko y Elena Pirogova contra la Sentencia núm. 1223, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, el doce (12) de octubre de dos mil dieciséis (2016).



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

prevista en el numeral 3)" -que "se haya producido una violación de un derecho fundamental"- a la que está referido y subordinado dicho párrafo.

47. Tampoco nos parece correcto verificar que se cumplen los literales a), b) y c) del numeral 3) sin que antes se compruebe el cumplimiento de lo que establece dicho numeral, es decir, que *"se haya producido la violación de un derecho fundamental"*.

48. Operar de esa manera no sólo contradice la lógica interna del texto legal, sino que, además, por lo inútil, carece de sentido. En efecto, ¿qué sentido tiene comprobar la invocación previa, el agotamiento de los recursos disponibles y la imputabilidad al órgano si no comprueba antes que es cierto el objeto de la invocación, de los recursos y de la imputabilidad, es decir, que es veraz la violación reclamada?

49. Aparte el sentido que ha dado al artículo 53 -del que discrepamos en estas líneas-, la mayoría ha hecho dos reparos fundamentales a nuestra posición: uno, que los referidos requisitos no son de admisibilidad; y otro, que el Tribunal no puede verificar que se haya producido la violación de un derecho fundamental -conforme lo establece el 53.3-, por lo que es necesario subvertir la lógica del texto y verificar, entonces, sus requisitos [53.3.a), 53.3.b), 53.3c) y párrafo] antes que la causal a la que estos se subordinan. Ambos los veremos a continuación.

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE REVISIÓN DE DECISIÓN JURISDICCIONAL

50. Como hemos explicado, el artículo 53 consagra *"los presupuestos de admisibilidad"*³³ del recurso.

³³ Jorge Prats, Eduardo. Op. Cit., p. 122.

Expedientes números TC-04-2017-0057 y TC-07-2017-0014, relativos al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional y a la demanda en suspensión de ejecución, ambos incoados por el señor Serguei Guerassimenko y Elena Pirogova contra la Sentencia núm. 1223, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, el doce (12) de octubre de dos mil dieciséis (2016).



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

51. La admisibilidad de un recurso o de una acción está directamente relacionada con el cumplimiento de los requisitos que ha establecido el legislador para interponerlos.

52. Conforme ha establecido el Tribunal Constitucional de Venezuela, la "*admisibilidad de la pretensión*", se encuentra referida al cumplimiento de los requisitos legales (generalmente de orden público) que permitan su tramitación. Por interpretación en contrario, la *inadmisibilidad de la pretensión* se produce por la insatisfacción de esas exigencias que impiden la continuación del proceso, cuya implicación directa en el orden procesal lo estatuye como de orden público, lo cual impide que se declare la inadmisibilidad de la acción bajo un supuesto ajeno al establecido expresamente en la ley y esta declaratoria de inadmisibilidad no difiere (como en el caso de la admisibilidad), el análisis del fondo de lo pretendido, sino que lo impide.³⁴

53. En todo caso, la admisibilidad es asunto fundamental. Más, en la jurisdicción de un Tribunal Constitucional, usualmente el órgano de cierre del sistema de justicia. Poco importa, en efecto, que los resultados concretos para quien interpone el recurso, sean prácticamente los mismos si el Tribunal lo inadmite, que si lo admite y lo rechaza. Es mucho más lo que está en juego: es el mandato de la ley, lo que en ningún caso es algo menor; es la funcionalidad del recurso mismo, el objeto para el que fue diseñado, el rol que tiene asignado; es la integridad de la jurisdicción en la que está previsto que opere dicho recurso; y es, con todo, la lógica de funcionamiento de todo el sistema.

54. Aunque con frecuencia no se reconozca, los usuarios del sistema de justicia –nos referimos específicamente a los abogados–, tienen la

³⁴ Tribunal Supremo de Justicia. Sala Constitucional. Venezuela. Exp.- 03-1886.

Expedientes números TC-04-2017-0057 y TC-07-2017-0014, relativos al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional y a la demanda en suspensión de ejecución, ambos incoados por el señor Serguei Guerassimenko y Elena Pirogova contra la Sentencia núm. 1223, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, el doce (12) de octubre de dos mil dieciséis (2016).



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

responsabilidad de contribuir, con sus actuaciones, a su mejor funcionamiento. Es claro, sin embargo, que en ningún caso pararán mientes para crear situaciones donde en realidad no las hay y acceder a cualquier jurisdicción a promover ante ellas cualquier tipo de recursos en defensa de sus particulares intereses.

55. Ante esta realidad -universal, no sólo dominicana-, los tribunales tienen la responsabilidad de evitar que tales actuaciones, ejercidas con absoluta libertad, puedan distorsionar el sistema o afectar su funcionamiento. La del Tribunal Constitucional es aún mayor.

56. Sobre la admisibilidad de este tipo de recursos, el Tribunal Constitucional de Perú ha explicado que

*el proceso de amparo en general y el amparo contra resoluciones judiciales en particular no pueden constituirse en mecanismos de articulación procesal de las partes, mediante los cuales se pretenda extender el debate de las cuestiones sustantivas y procesales ocurridas en un proceso anterior, sea éste de la naturaleza que fuere y que haya sido resuelto por los órganos jurisdiccionales ordinarios, pues no constituye un medio impugnatorio que continúe revisando una decisión que sea de exclusiva competencia de la jurisdicción ordinaria, facultad que constituye la materialización de la independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional que la Constitución Política reconoce a este Poder del Estado; a menos que pueda constatarse un proceder manifiestamente irrazonable, que no es el caso. **Que el amparo contra resoluciones judiciales requiere como presupuestos procesales indispensables la constatación de un agravio manifiesto a los derechos fundamentales** de las personas que comprometa seriamente su*

Expedientes números TC-04-2017-0057 y TC-07-2017-0014, relativos al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional y a la demanda en suspensión de ejecución, ambos incoados por el señor Serguei Guerassimenko y Elena Pirogova contra la Sentencia núm. 1223, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, el doce (12) de octubre de dos mil dieciséis (2016).



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

contenido constitucionalmente protegido (RTC N° 02363-2009-PA/TC); presupuesto básico sin el cual la demanda resulta improcedente.³⁵

57. En la raíz de todo esto se encuentra, también, la naturaleza del propio Tribunal Constitucional. Como ha señalado la doctrina, el Tribunal Constitucional no es una "super casación" de las resoluciones de los tribunales ordinarios, porque no es misión suya revisar la concepción jurídica causal de los fallos de los tribunales o examinar si se adecuan al derecho ordinario objetivo, formal o material; si bien corresponde al Tribunal Constitucional obligar a todos los poderes públicos a la más estricta observancia de los preceptos constitucionales y, en tal virtud, revisar la aplicación o interpretación que los tribunales ordinarios han realizado de tales normas fundamentales.³⁶

58. En efecto,

el Tribunal Constitucional no puede convertirse en juez supremo de cualquier asunto, tanto por razones prácticas como institucionales. (...) El Tribunal Constitucional, aunque resulte difícil delimitar su ámbito material de actuación allí donde existe un recurso como el recurso de amparo, debe limitar su campo de actuación evitando la tentación de convertirse en un tribunal de justicia más, que revisa las decisiones de los demás órganos, centrándose sólo en aquellas cuestiones que posean mayor relevancia e interés constitucional y evitando innecesarias tensiones institucionales.³⁷

³⁵ Tribunal Constitucional de Perú. RTC No. 03333-2011-PA/TC

³⁶ Martínez Pardo, Vicente José. *El recurso de amparo constitucional: consideraciones generales*. [En línea] Disponible en: www.enj.org. Consultado el 15 de mayo de 2013.

³⁷ Pérez Tremps, Pablo. *Los procesos constitucionales. La experiencia española*; PALESTRA, Perú, 2006, pp. 155- 156.

Expedientes números TC-04-2017-0057 y TC-07-2017-0014, relativos al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional y a la demanda en suspensión de ejecución, ambos incoados por el señor Serguei Guerassimenko y Elena Pirogova contra la Sentencia núm. 1223, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, el doce (12) de octubre de dos mil dieciséis (2016).



República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

59. En todo esto va, además, la “*seguridad jurídica*” que supone la “*autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada*” de una decisión para las partes envueltas en un proceso, de modo que, terminado un caso conforme las posibilidades que provee la legislación, éste no pueda ser revisado sino en casos muy excepcionales.

60. En este sentido, el recurso de revisión de decisión jurisdiccional modula el principio de la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, en la medida en que permite al Tribunal Constitucional modificar una decisión que tenga este atributo, a los fines de cumplir con su función de salvaguardar los derechos fundamentales que sean violados en el marco de un proceso jurisdiccional ordinario. Pero, eso sólo puede ocurrir, como hemos visto, en los muy específicos y excepcionales casos señalados. Esta es, en efecto, una posibilidad que no puede estar -y no está- abierta para todos los casos, sino sólo para aquellos que, superados los rigurosos filtros que la ley impone, puedan acceder a este recurso, ser admitidos por el Tribunal Constitucional y, consecuentemente, ser conocidos y decididos por éste.

61. Es lo que ocurre con el recurso de revisión de decisión jurisdiccional, cuyas condiciones de admisibilidad son establecidas por el artículo 53 y, por cierto, confirmadas por el artículo 54 de la misma ley.

A. Sobre el artículo 54 de la Ley No. 137-11

62. El artículo 54 establece el procedimiento que rige el recurso de revisión de decisión jurisdiccional, que incluye aspectos de admisibilidad que el Tribunal tiene que evaluar y respecto de ellos decidir.

63. El texto establece, incluso, una fase primera para la admisión y una posterior para la decisión del recurso, conforme los términos:

Expedientes números TC-04-2017-0057 y TC-07-2017-0014, relativos al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional y a la demanda en suspensión de ejecución, ambos incoados por el señor Serguei Guerassimenko y Elena Pirogova contra la Sentencia núm. 1223, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, el doce (12) de octubre de dos mil dieciséis (2016).



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

64.1 Del artículo 54.5, que reza: *"El Tribunal Constitucional tendrá un plazo no mayor de treinta días, a partir de la fecha de la recepción del expediente, para decidir sobre la admisibilidad del recurso. En caso de que decida admitirlo deberá motivar su decisión."*

64.2. Del artículo 54.6, que establece que la admisibilidad será decidida *"en Cámara de Consejo, sin necesidad de celebrar audiencia"*. Y

64.3. Del artículo 54.7, que dice: *"La sentencia de revisión será dictada por el Tribunal Constitucional en un plazo no mayor de noventa días contados a partir de la fecha de la decisión sobre la admisibilidad del recurso."*

64. En relación con la segunda fase, conviene retener lo que establecen:

65.1. El artículo 54.8, que expresa: *"La decisión del Tribunal Constitucional que acogiere el recurso, anulará la sentencia objeto del mismo y devolverá el expediente a la secretaría del tribunal que la dictó."* Y

65.2. El artículo 54.10, que dice: *"El tribunal de envío conocerá nuevamente del caso, con estricto apego al criterio establecido por el Tribunal Constitucional en relación del derecho fundamental violado o a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la norma cuestionada por la vía difusa."*

65. Sin embargo, el Tribunal decidió tomar ambas en una sola sentencia, en cuya estructura atiende y resuelve, primero, la admisibilidad del recurso y, luego, el fondo del mismo. Tal fue el contenido de su decisión en la sentencia TC/0038/12 del trece de septiembre de dos mil doce. En esta, el Tribunal reconoció que *debe emitir dos decisiones, una para decidir sobre la admisibilidad o no del recurso, y la otra, en el caso de que sea admisible, para*

Expedientes números TC-04-2017-0057 y TC-07-2017-0014, relativos al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional y a la demanda en suspensión de ejecución, ambos incoados por el señor Serguei Guerassimenko y Elena Pirogova contra la Sentencia núm. 1223, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, el doce (12) de octubre de dos mil dieciséis (2016).



República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

decidir sobre el fondo de la revisión constitucional de la sentencia”; y, en aplicación de los principios de celeridad, de economía procesal y de efectividad, resolvió decidir “la admisibilidad y el fondo del recurso mediante una sola decisión.

66. Precisamente, el hecho de que el legislador haya contemplado la necesidad de dos sentencias, una de admisibilidad y otra de fondo, evidencia la importancia de la fase de admisibilidad y, consecuentemente, la necesidad de que el Tribunal pondere y analice a fondo los requisitos o filtros creados por el legislador para admitir dicho recurso.

67. Así, conviene destacar que la salida del recurso –una decisión “*en relación del derecho fundamental violado*” (54.10)- es coherente con la entrada al mismo –que “*se haya producido una violación de un derecho fundamental*” (53.3)-. Verificada esta última para la admisión del recurso, como planteamos, su decisión conduce a la única solución posible, la fijación del criterio del Tribunal con respecto a la vulneración previamente identificada, en la que deberá establecer los lineamientos a ser seguidos por el tribunal del cual emanó la decisión inicialmente, para emitir su nueva decisión, conforme los artículos 54.9 y 54.10 ,así como todos los demás tribunales del país, para la interpretación, aplicación y protección del derecho en cuestión.

B. Sobre el tratamiento dado por el Tribunal Constitucional dominicano al artículo 53

68. Conviene, por supuesto, revisar el tratamiento que ha dado el Tribunal Constitucional dominicano a este recurso.



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

69. Se puede apreciar que la posición que sustentamos en este voto no es nueva para el Tribunal, por cuanto éste la había tomado, no en una sino en varias ocasiones. En efecto:

70.1: En su sentencia TC/0057/12 declaró inadmisibile el recurso, fundado en que no se cumplía con el requisito c) del 53.3, toda vez que **“la aplicación, en la especie, de la norma precedentemente descrita ha sido apegada a lo dispuesto por el legislador y, en consecuencia, no es imputable a la Suprema Corte de Justicia la comisión de una acción o una omisión cuya consecuencia haya sido la violación de un derecho fundamental”**.

70.2: Asimismo, en su sentencia TC/0064/12 declaró inadmisibile el recurso, en virtud de que “el pedimento **no es un fundamento que tenga la trascendencia y la relevancia** constitucional suficientes, **al no constituir violación a algún derecho tutelado por este tribunal**” . Es decir, no hay violación a derecho fundamental ni, consecuentemente, relevancia o trascendencia constitucional, por lo que se inadmite el recurso.

70.3: De igual manera, en su sentencia TC/0065/12, declaró inadmisibile el recurso debido a que **“en la especie ha quedado comprobada la no vulneración del derecho de propiedad alegado por las recurrentes, y al no existir la conculcación al derecho fundamental invocado, el presente recurso de revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales deviene en inadmisibile”**.

70.4: También, el Tribunal en su sentencia TC/0001/13 declaró inadmisibile el recurso porque dicho caso no tenía **“especial trascendencia o relevancia constitucional, en razón de que el tribunal que dictó la sentencia recurrida se limitó a declarar la perención de un recurso de casación (...)”**, y por tanto **“no se suscitó ninguna discusión relacionada a la protección de los derechos fundamentales”**. Y

Expedientes números TC-04-2017-0057 y TC-07-2017-0014, relativos al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional y a la demanda en suspensión de ejecución, ambos incoados por el señor Serguei Guerassimenko y Elena Pirogova contra la Sentencia núm. 1223, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, el doce (12) de octubre de dos mil dieciséis (2016).



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

70.5: Igualmente, en su sentencia TC/0069/13, declaró inadmisibile el recurso, fundado en que en ese caso "no existe la posibilidad de vulnerar derechos fundamentales, y por tanto el recurso (...) no cumple con los supuestos de las decisiones jurisdiccionales a las que se contrae el artículo 53".

70.6: Más recientemente, en su sentencia TC/0121/13 estableció que al no constituir la omisión de estatuir un error puramente material, no se verifica violación alguna a los derechos fundamentales de los recurrentes (...). En consecuencia, la interposición por parte de los recurrentes de la revisión constitucional en la especie no cumple con la normativa prevista en el citado artículo 53.3 de la Ley No. 137-11, por lo que procede inadmitir el recurso que nos ocupa.

70. Hay que decir, sin embargo, que, junto a lo anterior, el Tribunal ha dado un tratamiento diferente a la admisibilidad del recurso en muchos otros casos, por lo hay que reconocer que, si a precedentes vamos, el Tribunal los tiene en ambos sentidos.

71. Conviene retener, en todo caso, que muchos de los recursos que el Tribunal ha admitido, han sido rechazados por no cumplir con lo que el 53.3 establece, es decir, que "se haya producido la violación de un derecho fundamental".

III. EL QUID DE LA PROHIBICIÓN DE REVISAR LOS HECHOS EN LOS RECURSOS DE REVISION DE DECISION JURISDICCIONAL

72. Como avanzamos, una de las razones que ha guiado a la mayoría en esta decisión se desprende de la prohibición de revisar los hechos, consagrada en el artículo 53.3.c). Nos parece, sin embargo, que esta no es bien entendida.

Expedientes números TC-04-2017-0057 y TC-07-2017-0014, relativos al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional y a la demanda en suspensión de ejecución, ambos incoados por el señor Serguei Guerassimenko y Elena Pirogova contra la Sentencia núm. 1223, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, el doce (12) de octubre de dos mil dieciséis (2016).



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

73. Se ha dicho, en efecto, que el Tribunal no puede verificar la violación de un derecho fundamental, como exige el 53.3, porque no puede revisar los hechos, como consagra el 53.3.c).

74. Resulta interesante, por cierto, notar que este planteamiento no cuestiona la pertinencia de comprobar, a la entrada del recurso, que *“se haya producido una violación de un derecho fundamental”*, sino que se resigna ante la supuesta imposibilidad de hacerlo.

75. Resulta igualmente interesante -y hasta curioso- apreciar que, sin que se aporte alguna explicación razonable, tal imposibilidad no se considere para verificar, también a la entrada del recurso, la invocación previa de la vulneración reclamada, ni para comprobar el agotamiento previo de todos los recursos disponibles sin que la violación haya sido subsanada, ni para establecer la imputabilidad inmediata y directa al órgano jurisdiccional del que proviene la decisión recurrida.

76. En relación con esto último, sin embargo, precisamos que, por ejemplo, la comprobación de que el derecho de defensa, cuya vulneración usualmente sirve de base a este recurso, no se ha producido en vista de que la recurrente participó en el proceso y defendió sus intereses, en nada se diferencia de la comprobación de que el derecho vulnerado se invocó previamente en el proceso ni de la comprobación de los otros dos requisitos del 53.3. Cada una de estas actuaciones se relaciona de la misma forma con los hechos. Ninguna de aquellas implica la revisión de estos. Y lo mismo, pues, debería considerarse a la hora de comprobar que *“se haya producido una violación de un derecho fundamental”*.

77. En todo caso, como ya avanzamos y demostraremos en estas líneas, esa imposibilidad no es tal, es una imposibilidad mal entendida.

Expedientes números TC-04-2017-0057 y TC-07-2017-0014, relativos al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional y a la demanda en suspensión de ejecución, ambos incoados por el señor Serguei Guerassimenko y Elena Pirogova contra la Sentencia núm. 1223, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, el doce (12) de octubre de dos mil dieciséis (2016).



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

78. Por supuesto que el Tribunal no puede revisar los hechos contenidos en el recurso. Pero no es eso lo que está en juego aquí. Lo que está en juego, como en otros aspectos de este artículo 53, es lo que se aprehende de esa norma, en este caso lo que se entiende por revisar los hechos.

79. La imposibilidad de revisar los hechos es coherente con la naturaleza del recurso. Se trata de un recurso excepcional y, en tal virtud, no es “*un recurso universal de casación*”³⁸ ni, como ha dicho el Tribunal Constitucional español, “*una tercera instancia*”³⁹ ni “*una instancia judicial revisora*”⁴⁰. Este recurso, en efecto, “*no ha sido instituido para asegurar la adecuación de las resoluciones judiciales a la realidad de los hechos o a la idea que acerca de estos tengan las partes*”⁴¹. Hacerlo sería anacrónico pues conllevaría que “*los ámbitos constitucionalmente reservados al Poder Judicial, de una parte, y al TC, de la otra, quedarían difuminados*”⁴².

80. En este sentido, el Tribunal Constitucional español ha rechazado la “*constante pretensión*”⁴³ de que mediante este recurso se revisen íntegramente los procesos “*penetrando en el examen, resultado y valoración de las pruebas practicadas y justeza o error del derecho aplicado y de las conclusiones alcanzadas en las sentencias allí dictadas, erigiendo esta vía del amparo constitucional en una auténtica superinstancia, si no en una nueva casación o revisión.*”⁴⁴

81. Así, ha reiterado la alta corte española que, en realidad,

³⁸ Fernández Farreres, Germán. *El Recurso de Amparo según la Jurisprudencia Constitucional*; Marcial Pons, Madrid, 1994, p. 35.

³⁹ *Ley Orgánica del Tribunal Constitucional*. Editora COLEX, segunda edición, 2008, España, p. 221.

⁴⁰ *Ibíd.*

⁴¹ *Ley Orgánica del Tribunal Constitucional*. Op. cit., p. 231.

⁴² Fernández Farreres, Germán. Op. Cit., p. 310.

⁴³ STC 105/83, 23 de noviembre de 1983. En: Portero Molina, José Antonio. *Constitución y jurisprudencia constitucional*; séptima edición corregida y aumentada con jurisprudencia, Tirant lo Blanch, Valencia, 2012, p. 477.

⁴⁴ *Ibíd.*

Expedientes números TC-04-2017-0057 y TC-07-2017-0014, relativos al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional y a la demanda en suspensión de ejecución, ambos incoados por el señor Serguei Guerassimenko y Elena Pirogova contra la Sentencia núm. 1223, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, el doce (12) de octubre de dos mil dieciséis (2016).



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

en esta clase de recursos la función del T.C. se limitará a concretar si se han violado o no los derechos o libertades del demandante, preservándolos o restableciéndolos, más absteniéndose de cualquier otra consideración sobre la actuación de los órganos jurisdiccionales (...), porque (...) en el amparo constitucional no pueden hacerse valer otras pretensiones que las dirigidas a restablecer o preservar los derechos o libertades por razón de las cuales se formuló el recurso.⁴⁵

82. Ha reiterado, asimismo:

La justicia constitucional de amparo no es, en modo alguno, una instancia de revisión y por ello no es la actuación global de un determinado órgano judicial en un determinado proceso objetivada en una Sentencia también determinada lo que constituye el objeto del proceso de amparo constitucional, sino tan solo aquellas violaciones de derechos y libertades que tengan ‘su origen inmediato y directo en un acto u omisión de un órgano jurisdiccional’ (art. 44.1 de la LOTC). Es más: tales posibles violaciones han de ser enjuiciadas ‘con independencia de los hechos que dieron lugar al proceso en que aquellas se produjeron acerca de los que, en ningún caso, entrará a conocer el Tribunal Constitucional.’⁴⁶

83. Como se aprecia, el sentido de la expresión “*con independencia de los hechos*” es que, separadamente de los hechos que explican el proceso, el Tribunal se limitará a verificar que se ha producido la violación de un derecho fundamental y que ella es imputable al órgano judicial del que proviene la

⁴⁵ *Ibíd.*

⁴⁶ ATC 110/81. En: Fernández Farreres, Germán. Op. Cit., p. 312. Precisa este autor: “*El ATC 110/81, f.j.1, entre los primeros pronunciamientos sobre esta cuestión (con posterioridad, entre otros muchos, AATC 119/83, 359/83, 595/83, 20/84, 178/85, etc.)...*”.

Expedientes números TC-04-2017-0057 y TC-07-2017-0014, relativos al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional y a la demanda en suspensión de ejecución, ambos incoados por el señor Serguei Guerassimenko y Elena Pirogova contra la Sentencia núm. 1223, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, el doce (12) de octubre de dos mil dieciséis (2016).



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

sentencia recurrida, sea porque la generó o sea porque no la subsanó. Así, “*con independencia de los hechos*”, de ninguna manera significa que el Tribunal ha de operar de espaldas a los hechos, sino que, de frente a ellos, focaliza su actuación en lo relativo a la vulneración de derechos fundamentales que se le presenta en el recurso.

84. El quid de la prohibición de revisar los hechos está en que el Tribunal, en el marco del recurso, tiene que asumir –y asume- como veraces y válidos “*los hechos inequívocamente declarados*”⁴⁷ en las sentencias recurridas mediante el recurso. El Tribunal tiene que partir –y parte- de unos hechos que le son dados y que no puede revisar, no puede modificar.

85. En este sentido, el órgano de cierre de la justicia española ha subrayado que no es atribución suya la de “*revisar los hechos declarados probados y el derecho aplicado en la resolución judicial impugnada*”,⁴⁸ sino que, por el contrario, está obligado a “*partir de los hechos que dieron lugar al proceso declarados probados por las Sentencias impugnadas (...)*”.⁴⁹

86. Como ha dicho Pérez Tremps,

el recurso de amparo es un recurso donde no se debate sobre elementos fácticos sino sólo sobre cuestiones jurídicas, por más que estas se proyecten siempre sobre hechos. Por tanto, casi en la totalidad de las ocasiones, todo el sustrato fáctico del recurso de amparo viene predeterminado en la vía judicial previa, sin que pueda revisarse en

⁴⁷ Fernández Farreres, Germán. Op. Cit., p. 184.

⁴⁸ Fernández Farreres, Germán. Op. Cit., p. 183.

⁴⁹ STC 2/82. En: Fernández Farreres, Germán. Op. Cit., p. 159.

Expedientes números TC-04-2017-0057 y TC-07-2017-0014, relativos al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional y a la demanda en suspensión de ejecución, ambos incoados por el señor Serguei Guerassimenko y Elena Pirogova contra la Sentencia núm. 1223, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, el doce (12) de octubre de dos mil dieciséis (2016).



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

*amparo (...), de forma que, constando en las actuaciones, no procederá realizar prueba alguna.*⁵⁰

87. Y en otra parte, aún más claramente, ha dicho el destacado jurista español: *"en los recursos de amparo contra actos y decisiones judiciales (...), el Tribunal Constitucional ejerce un control de tipo casacional puesto que no hay identidad de objeto entre el proceso judicial y el recurso de amparo, sino sólo una revisión de aquel en lo que atañe al respecto a los derechos fundamentales"*.⁵¹

88. Sin embargo, la prohibición de revisar los hechos no puede implicar –y no implica– vendar los ojos del Tribunal a la hora de resolver el recurso. Tal no es, ni puede ser, el sentido de la norma. Si así fuera, el Tribunal tendría, entonces, que renunciar a las comprobaciones que manda el artículo 53.3, y resignar, por tanto, el cumplimiento de este requisito. El Tribunal quedaría en la anacrónica situación de no poder cumplir lo que la ley le exige y no poder ejercer *"el control constitucional de las resoluciones impugnadas en sede de garantía de los derechos fundamentales"*.⁵²

89. En relación con esto, es ineludible retener que, como también ha dicho el Tribunal Constitucional español, *"la prohibición de ‘conocer’ de los hechos concierne a la acepción técnico- procesal de este vocablo que alude a la atribución de competencia. No se trata de prohibición de conocimiento en el sentido de ilustración o análisis reflexivo de los antecedentes que puede resultar positivo e incluso necesario para fundar la resolución"*;⁵³ precisión que ha sido reiterada en STC 62/82 y STC 47/85 y en otras decisiones y que

⁵⁰ Pérez Tremps, Pablo. *El recurso de amparo*; Tirant lo Blanch, Valencia, 2004, p. 285.

⁵¹ Pérez Tremps, Pablo. *El recurso de amparo*. Op. cit., p. 300.

⁵² STC 143/91. En: Fernández Ferreres, Germán. Op. Cit., p. 184.

⁵³ STC 46/82. En: Fernández Ferreres, Germán. Op. Cit., p. 183



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

*resulta capital, por cuanto supone que el TC no puede revisar los hechos de los que ha conocido el órgano judicial tal como los mismos han quedado fijados definitivamente en el correspondiente proceso. Es decir, como se ha señalado en diferentes ocasiones (SSTC 54/84, 38/85, etc.), la eficacia del recurso de amparo se hace depender de la base o apoyo que supone el respeto a los hechos que se hayan declarado probados por los Tribunales ordinarios (...).*⁵⁴

90. Al respecto, Pérez Tremps es claro nuevamente, cuando afirma que

*una cosa es que el Tribunal Constitucional deba abstenerse de volver a determinar los aspectos fácticos, ya fijados por los Tribunales ordinarios, o de revisar esa fijación, y otra es que esos aspectos fácticos no sean relevantes en el recurso de amparo para concluir si ha existido o no lesión de derechos, pudiéndose, pues, valorar desde esta estricta perspectiva jurídica. Dicho de otra manera, el que no puedan modificarse los hechos declarados probados por los jueces y tribunales es diferente de que no pueda modificarse la valoración jurídica de esos hechos, valoración que está, en la mayor parte de los casos, en la base misma de la petición de amparo.*⁵⁵

91. Como se aprecia, lo que no puede hacer el Tribunal es

*revisar los hechos declarados probados por el Juez ordinario, en lo que toca a la existencia misma de tales hechos”*⁵⁶. O bien, lo que se prohíbe “a este Tribunal es que entre a conocer de los ‘hechos que dieron lugar al proceso’ cuando la violación del derecho fundamental, cometido por

⁵⁴ STC 46/82. En: Fernández Ferreres, Germán. Op. Cit., p. 183.

⁵⁵ Pérez Tremps, Pablo. *El recurso de amparo*. Op. cit., p. 301.

⁵⁶ STC 50/91. En: Fernández Ferreres, Germán. Op. Cit., p. 186.



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

el órgano judicial, lo sea ‘con independencia de tales hechos’ o, lo que es lo mismo, lo que veda dicho precepto es el conocimiento de los hechos que sustentan una pretensión ordinaria (penal, civil o administrativa), que pudiera estar en conexión con una pretensión de amparo, nacida como consecuencia de una violación por el órgano judicial de un derecho fundamental; debiendo este Tribunal limitar, en tal caso, su examen a los hechos que fundamentan esta última pretensión constitucional.⁵⁷

92. En fin, que una cosa es mirar los hechos y otra, sustancialmente diferente, es revisarlos. Y es esto último lo que se prohíbe hacer al Tribunal Constitucional. En este sentido, el Tribunal Constitucional puede mirar los hechos y, desde esa mirada, realizar las comprobaciones que sean pertinentes - entre ellas, la fundamental de que se haya producido una violación de un derecho fundamental-.

93. Todo esto adquiere mayor relevancia, cuando se atiende la clara indicación de la realidad: tal como ha ocurrido en España -según ha revelado el ex Magistrado del Tribunal Constitucional español, Pablo Pérez Tremps-, también en nuestro país, las violaciones a derechos fundamentales reclamadas en el marco de estos recursos son usualmente procesales,⁵⁸ cuya comprobación es objetiva y supone un riesgo mínimo, por no decir inexistente, de que el Tribunal violente los límites y pase a revisar los hechos.

94. Así, la imposibilidad de revisar los hechos es una norma mal entendida que ha conducido a una conclusión equivocada -la imposibilidad de verificar la

⁵⁷ STC 59/90. En: Fernández Farreres, Germán. Op. Cit., p. 185.

⁵⁸ Es eso, justamente, lo que se aprecia al analizar los recursos de revisión de decisión jurisdiccional interpuestos ante el Tribunal Constitucional dominicano: de sesenta y ocho (68) analizados al nueve (9) de junio del año dos mil catorce (2014), en cincuenta y cinco (55) lo que se invoca es la violación de la tutela judicial efectiva y del debido proceso.

Expedientes números TC-04-2017-0057 y TC-07-2017-0014, relativos al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional y a la demanda en suspensión de ejecución, ambos incoados por el señor Serguei Guerassimenko y Elena Pirogova contra la Sentencia núm. 1223, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, el doce (12) de octubre de dos mil dieciséis (2016).



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

violación de un derecho fundamental a la entrada del recurso- y, consecuentemente, a desvirtuar sus requisitos de admisibilidad.

IV. SOBRE EL CASO CONCRETO.

95. En la especie, los recurrentes hacen alusión a que con la sentencia número 1233, del 12 de octubre de 2016, fueron violados sus derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva y a un debido proceso, en la medida que la Corte de Casación —aplicando los términos del artículo 1 de la Ley núm. 3726, sobre Procedimiento de Casación— declaró inadmisibile su recurso sin adentrarse a analizar los medios de casación que le fueron planteados.

96. Al respecto, el Tribunal Constitucional sostiene que a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia no se le puede —ni debe— imputar la violación de tal derecho fundamental porque la inadmisibilidad del recurso de casación impulsado por Serguei Guarassimenko y Elena Pirogova, parte recurrente, se ha debido a la aplicación de la normativa procesal vigente. En ese sentido motivó indicando que:

El tercero de los requisitos no se cumple en la especie, toda vez que, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia declaró inadmisibile el recurso de casación, en virtud de que, la sentencia recurrida no tenía abierta la vía de los recursos instituidos por la ley, sino de una acción principal en nulidad, por lo que, al interponerse el recurso de casación por ante la Suprema Corte de Justicia, el mismo deviene en inadmisibile, por no tratarse de una sentencia a la que se refiere el artículo 1ro., de las Ley núm. 3726 sobre Procedimiento de Casación dictada el 29 de diciembre del 1953, es por ello que, la falta fue cometida por el mismo recurrente, al no cumplir con el mandato de la ley, y, no por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia.

Expedientes números TC-04-2017-0057 y TC-07-2017-0014, relativos al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional y a la demanda en suspensión de ejecución, ambos incoados por el señor Serguei Guerassimenko y Elena Pirogova contra la Sentencia núm. 1223, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, el doce (12) de octubre de dos mil dieciséis (2016).



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En este contexto podemos concluir, que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, al sustentar su fallo en la aplicación de dicho artículo 1ro., de la ley anteriormente citada, no se le puede imputar vulneración de derechos fundamentales, ya que, como bien estableció dicha sala en la parte in-fine de su decisión, considerando 4, de la paginas 5 y 6, al disponer: “que el proceso mediante el cual se produjo la adjudicación se desarrolló sin incidentes, de lo que resulta que la decisión adoptada al efecto tiene un carácter puramente administrativo pues se limita a dar constancia del transporte, a favor de la adjudicataria, del derecho de propiedad del inmueble subastado, y por tanto, no es susceptible de los recursos instituidos por la ley, incluyendo el recurso de casación, sino de una acción principal en nulidad; que, en consecuencia, no se trata de una de las decisiones a que se refiere el artículo 1 de la ley sobre procedimiento de casación núm. 3726, dictada el 29 de diciembre de 1953, motivo por el cual el recurso que nos ocupa es inadmisibles”.

Por lo anterior, las conculcaciones a derechos fundamentales invocadas por los recurrentes en revisión, no les son imputables a la referida alta corte, razón por lo que, procede declarar inadmisibles el recurso de revisión que nos ocupa, en vista de que no se satisface el indicado requisito de admisibilidad previsto en el artículo 53.3.c de la referida ley núm. 137-11.

97. En ese tenor, asentimos con la solución dada por la mayoría al recurso interpuesto; Sin embargo, nuestro salvamento va orientado a que no compartimos el manejo que le ha dado la mayoría del Tribunal Constitucional al artículo 53.3 de la ley número 137-11, para declarar inadmisibles el recurso.

98. En el análisis donde se determina la inadmisibilidad del recurso, la mayoría del Pleno del Tribunal Constitucional indicó que se satisfizo el

Expedientes números TC-04-2017-0057 y TC-07-2017-0014, relativos al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional y a la demanda en suspensión de ejecución, ambos incoados por el señor Serguei Guerassimenko y Elena Pirogova contra la Sentencia núm. 1223, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, el doce (12) de octubre de dos mil dieciséis (2016).



República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

requisito establecido en la parte capital del artículo 53.3 de la ley número 137-11, en cuanto a que el recurso de revisión de decisión jurisdiccional, fundamentado en la causal de violación de derechos fundamentales, superó dicho estadio de admisibilidad en el momento en que los recurrentes invocaron la violación a sus derechos fundamentales, más no el indicado en el artículo 53.3.c) debido a que no le puede ser imputable la supuesta violación a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia.

99. Discrepamos de tal postura puesto que, tal y como hemos explicado previamente, de conformidad con las disposiciones del artículo 53.3 de la ley número 137-11, el Tribunal Constitucional en los casos que admita que en el recurso concurre dicha causal de revisión, primero debe fundamentarse en la comprobación de las violaciones invocadas o de la existencia de indicios de violación, no así en la mera alegación o denuncia de tal violación, para luego, proceder a evaluar la concurrencia de todos y cada uno de los subsiguientes requisitos de admisibilidad, inclusive la especial trascendencia o relevancia constitucional establecida en el párrafo del precitado artículo 53.

100. En este sentido, en todo caso, y especialmente cuando se requiera el estudio y la ponderación de multiplicidad de pruebas y documentos, el Tribunal tiene, siempre conforme los términos del artículo 53 respecto de la admisibilidad del recurso, la obligación de, por lo menos, verificar la existencia de alguna evidencia que apunte a que hubo una vulneración de un derecho fundamental o que dicha vulneración sea discutible.

101. Lo que en ningún caso puede hacer el Tribunal es dar como válido para superar el estadio del artículo 53.3 que el recurrente se limite simplemente a “alegar, indicar o referir” que se le vulneró un derecho, porque, como indicamos previamente, esto haría que el recurso fuera admisible muchas más veces de las que en realidad es necesario en la justicia constitucional, retrasando procesos en

Expedientes números TC-04-2017-0057 y TC-07-2017-0014, relativos al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional y a la demanda en suspensión de ejecución, ambos incoados por el señor Serguei Guerassimenko y Elena Pirogova contra la Sentencia núm. 1223, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, el doce (12) de octubre de dos mil dieciséis (2016).



República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

los que es ineludible que el Tribunal se pronuncie para garantizar la supremacía de la Constitución y la protección de los derechos fundamentales vulnerados.

102. Enfatizamos que el recurso de revisión de decisión jurisdiccional es un recurso excepcional y extraordinario que debe pasar por un filtro para poder ser admitido. Por tanto, la evaluación exhaustiva de estos requisitos es imprescindible para el buen funcionamiento de esta figura procesal constitucional.

103. En el presente caso, la mayoría del Pleno del Tribunal Constitucional, para indicar que el recurso es inadmisibile por ausencia del requisito establecido en el artículo 53.3.c) se basó en que la parte recurrente fundamentó los motivos de su recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional en la violación de sus derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva y a un debido proceso, ya que con la aplicación por parte de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia del artículo 1 de la ley que regula el procedimiento de casación para inadmitir su recurso de casación, dicha Corte no estatuyó sobre el fondo de sus pretensiones.

104. Sin embargo, entendemos que el Tribunal Constitucional —para superar el estadio de admisibilidad de la parte capital del artículo 53.3, como al efecto lo hizo— debió aclarar que los recurrentes no sólo deben limitarse a invocar la violación de sus derechos fundamentales, sino que debieron demostrarlos, o, al menos, que había un indicio de ella, para así, de ser procedente, evaluar los demás requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 53.3 de la ley número 137-11, lo cual no hubiera sido necesario en la especie una vez constatada la ausencia de violación a los derechos fundamentales de los recurrentes, motivo en el cual debió estar sustanciada la inadmisibilidad del recurso.

105. Por todo lo anterior, y aunque estamos de acuerdo con la decisión de inadmitir el recurso; entendemos que en este caso el Tribunal Constitucional

Expedientes números TC-04-2017-0057 y TC-07-2017-0014, relativos al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional y a la demanda en suspensión de ejecución, ambos incoados por el señor Serguei Guerassimenko y Elena Pirogova contra la Sentencia núm. 1223, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, el doce (12) de octubre de dos mil dieciséis (2016).



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

debió evaluar los presupuestos de admisibilidad del recurso de revisión de decisión jurisdiccional establecidos en el artículo 53 de la ley número 137-11, en los términos que hemos expuesto en los párrafos precedentes y a partir de esto inadmitir el recurso por no haberse satisfecho el requisito de la parte capital del artículo 53.3, es decir, que no se produjo la violación de derecho fundamental alguno a la recurrente.

Firmado: Justo Pedro Castellanos Khoury, juez

La presente sentencia es dada y firmada por los señores jueces del Tribunal Constitucional que anteceden, en la sesión del Pleno celebrada el día, mes y año anteriormente expresados, y publicada por mí, secretario del Tribunal Constitucional, que certifico.

Julio José Rojas Báez
Secretario